



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 20 de enero de 2015, el hoy recurrente presentó ante la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República, una solicitud de acceso a la información, mediante el Sistema de Solicitudes de Información INFOMEX-Gobierno Federal, a través de la cual solicitó, lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información:
"Entrega por Internet en el INFOMEX"

Descripción clara de la solicitud de información:
"Solicito el listado y descripción de objetos, ropas, restos, casquillos y todo tipo de prueba pericial encontrados como evidencia del caso Ayotzinapa y si se tiene se me entregue fotos y copia de las actas con las constancias. Gracias." (sic)

II. El 12 de febrero de 2015, la Procuraduría General de la República, mediante el Sistema Infomex, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información, en los siguientes términos:

"[...]"

Con fundamento en los artículos 44 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada no puede ser proporcionada debido a que es:

Reservada 12 años.

Motivo del daño por divulgar la información:

LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CLASIFICADA COMO RESERVADA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LO ANTERIOR POR ENCONTRARSE INMERSA EN AVERIGUACIONES PREVIAS

Ley:
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES

Artículo y Fracción

16

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 14, fracción III



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

PUBLICA GUBERNAMENTAL

Archivo 0001700020815_075.pdf

"[...] (sic)

El archivo adjunto a la respuesta del sujeto obligado, contiene copia simple de oficio número **SJA/DGAJ/01484/2015**, de fecha 09 de febrero de 2015, emitido por la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República, en los siguientes términos:

"[...]

Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 41 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento; así como 49 fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con relación a la solicitud de acceso a la información registrada bajo el número de folio de referencia, en donde requiere:

[Téngase por reproducida la solicitud de Acceso a la Información]

Se hace del conocimiento, que su petición se derivó para su atención a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Derivado de lo anterior la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada comunicó que los datos solicitados se encuentran inmersos en averiguación previa y por ende tiene el carácter de reservado, conforme lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, motivo por el cual no es posible hacerla del conocimiento, ni revelarla a un particular, bajo ninguna circunstancia, por lo que la información podrá permanecer con tal carácter hasta por un **periodo de doce años**, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 30 de su Reglamento.

Lo anterior se sustenta de igual forma, a través de lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone:

'Artículo 16.-...

...La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son **estrictamente reservados**.

...



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

*Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la
averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le
sujeta al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que
corresponda.*

...

Además, se considerará reservada, aquella información relacionada con las actividades que el Ministerio Público lleva a cabo durante la etapa de la averiguación previa, es decir, en el lapso en que se realizan todas aquellas actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito, a efecto de ejercer, o no, la acción penal.

En consecuencia no resulta posible dar información a la solicitud planteada, toda vez que existe impedimento legal para proporcionar datos relativos a las averiguaciones previas, porque reviste características de confidencialidad o no divulgable y a efecto de definir cuáles son esos parámetros, encuentran su sustento legal en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

'Artículo 14. También se considerará como información reservada:

...

III.- Las averiguaciones previas;...'

De la transcripción anterior, se advierte que las actuaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, no tienen la calidad de registros públicos, ni pueden ser considerados como fuente de acceso al público.

En suma, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, motiva la información y la clasifica como reservada en términos de los artículos 45, primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción III de su Reglamento, por disposición expresa de la ley.

Además cabe precisar, que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ha establecido en su 'Criterio de Interpretación de la fracción I del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental':

Que existe un principio general de derecho y de interpretación de la ley llamado 'principio de reserva de ley'. Dicho principio establece, que cuando el legislador, ya sea en su carácter de constituyente o de legislador ordinario, hace referencia a la regulación que se hace en otra 'ley', se entiende que se refiere a una ley en sentido formal y material, es decir, a un ordenamiento jurídico con las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, pero además que haya sido expedido a través del proceso legislativo establecido en la Constitución Mexicana.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Luego entonces, se insiste que el fundamento legal en que se apoya esta Subprocuraduría, para reservar su información deviene de una ley federal, como es la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada:

'Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el inculpado y su defensor, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas...'

Es una ley en sentido formal y material la que regula un sector concreto del ordenamiento jurídico, y bajo esa línea de pensamiento, se solicita que en este caso concreto se pondere la jerarquía normativa, que sustenta la reserva de la información planteada por esta Institución.

Otro impedimento jurídico que tiene esta autoridad para ventilar la información solicitada es lo previsto en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, que dispone:

'Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes:

XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos constancias o información que obren en una averiguación previa o en un Proceso penal y que Por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial confidenciales....

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones...XXVIII..., se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa. (Nota: el subrayado no es de origen).

Bajo este contexto, el servidor público que quebrante la reserva de la información al dar a conocer datos inmersos en averiguaciones previas, a quien no tiene derecho, incumpliría en lo preceptuado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito de Contra la Administración de Justicia, por lo que no es posible atender lo solicitado.

Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales en concordancia con el 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 27 de su Reglamento, se determina que la información solicitada se considera reservada, haciéndose valer la imposibilidad jurídica para responder a la solicitud en cuestión.

Al respecto y dado la reserva manifestada por SEIDO, resulta aplicable el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el cual señala:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

'Artículo 31. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva; la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités a que se refiere el Artículo 29, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa.'

En ese entendido, y por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **no es procedente pronunciamiento alguno por parte del Comité de Información, ya que SEIDO, no se encuentra sujeta a la autoridad de dicho Comité para declarar la reserva de la información solicitada.**

No obstante lo anterior y atendiendo al principio de máxima publicidad, contenida en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo considerado con carácter de público con la que cuenta esta Institución se encuentra disponible para su consulta a través de los boletines 180/14, 182/14, 184/14, 187/14, 191/14, 192/14, 193/14, 194/14, 195/14, 197/14, 198/14, 199/14, 201/14, 207/14, 210/14, 212/14, 214/14, 218/14, 225/14, 228/14, 240/14, 003/15, 005/15, 009/15 y 017/15, anexando para pronta referencia los vínculos electrónicos de los mismos.

- **Boletín 180/14**

<http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Oct/b18014.shtm>

- **Boletín 182/14**

<http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b18214.shtm>

- **Boletín 184/14**

<http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b18414.shtm>

- **Boletín 187a/14**

<http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b187a14.shtm>

- **Boletín 191/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19114.shtm>

- **Boletín 192/14**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19214.shtm>

• **Boletín 193/14**

<http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19314.shtm>

• **Boletín 194/14**

<http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Oct/b19414.shtm>

• **Boletín 195/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19514.shtm>

• **Boletín 197/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19714.shtm>

• **Boletín 198/14**

<http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm>

• **Boletín 199/14**

<http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19914.shtm>

• **Boletín 201/14**

<http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Oct/b20114.shtm>

• **Boletín 207/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b20714.shtm>

• **Boletín 210/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b210%2014.shtm>

• **Boletín 212/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21214.shtm>

• **Boletín 214/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21414.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- **Boletín 218/14**

<http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Nov/b21814.shtm>

- **Boletín 225/14**

<http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Nov/b22514.shtm>

- **Boletín 228/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b22814.shtm>

- **Boletín 240/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Dic/b24014.shtm>

- **Boletín 003/15**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b00315.shtm>

- **Boletín 005/15**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b00515.shtm>

- **Boletín 009/15**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b00915.shtm>

- **Boletín 017/15**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>

Por otra parte puede consultar la página electrónica de la Presidencia de la República en el micrositio:

- <http://www.presidencia.gob.mx/Ayotzinapa/>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas



Si usted tiene alguna duda sobre la respuesta otorgada, puede acudir a esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, ubicada en Río Guadiana No. 31, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal o llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensiones 5716 y 5717, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 y 16:30 a 19:30; o bien, escribanos al correo leydetransparencia@pgr.gob.mx en donde con gusto atenderemos sus dudas y/o comentarios.
[...] (sic)

III. El 16 de febrero de 2015, este Instituto recibió el recurso de revisión interpuesto por el recurrente en contra de la Procuraduría General de la República, en el cual manifestó lo siguiente:

Acto que se recurre y puntos petitorios:

"Interpongo este Recurso de Revisión ante la PGR, debido a que reserva la información que estoy solicitando sobre el caso Ayotzinapa. El mismo IFAI en el recurso ya resuelto con numero de expediente RDA 5366/14 ante SEDENA indico que no importa que la información forme parte de una averiguación previa en curso y aun que pueda contener datos que vulneren la actuación del Ministerio Público Federal. Debe entregar la información debido a que existe un interés público que es superior a la reserva de la información dado que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es por lo tanto, nadie incluida la PGR podrá clasificar esta información como reservada. Gracias."

Otros elementos que considere someter a juicio del IFAI:

"Recurso donde el IFAI dice que no se puede reservar información sobre el caso Ayotzinapa. <http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Nota%20IFAI-011-15.pdf>." (sic)



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

IV. El 16 de febrero de 2015, la Comisionada Presidenta asignó el número de expediente **RDA 0617/15** al aludido recurso de revisión y, de conformidad con el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente **Francisco Javier Acuña Llamas**, para efectos de lo establecido en el artículo 55, fracción I de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

V. El 23 de febrero de 2015, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente¹, acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por el recurrente en contra de Procuraduría General de la República, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 88 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

VI. El 24 de febrero de 2015, el Comisionado Ponente notificó a la Procuraduría General de la República, a través de la Herramienta de Comunicación, la admisión del recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, dando cumplimiento al artículo 88 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

VII. El 24 de febrero de 2015, el Comisionado Ponente notificó al particular, mediante correo electrónico, la admisión del recurso de revisión, informándole sobre su derecho para presentar alegatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* y 86 de su *Reglamento*.

VIII. El 06 de marzo de 2015, este Instituto recibió, mediante la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, el oficio número **SJAI/DGAJ/02820/2015**, de fecha 04 del mismo mes y año de su recepción, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad del Enlace del

¹ De conformidad con lo dispuesto por el numeral Primero, fracción IX del Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el que se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia, para coadyuvar con los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos competencia del Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2014.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

sujeto obligado, y dirigido al Comisionado Ponente, mediante el cual se manifestaron los siguientes alegatos:

[...]

ALEGATOS

PRIMERO.- La presente solicitud se turnó para su atención a la **Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)**, misma que, en respuesta a la solicitud, manifestó la imposibilidad jurídica para entregar la información solicitada, en los términos siguientes:

*'Derivado de lo anterior la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada comunico que los datos solicitados se encuentran inmersos en averiguación previa y por ende tiene el carácter de reservado, conforme lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, motivo por el cual no es posible hacerla del conocimiento, ni revelarla a un particular, bajo ninguna circunstancia, por lo que la información podrá permanecer con tal carácter hasta por un **periodo de doce años**, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 30 de su Reglamento.*

Lo anterior se sustenta de igual forma, a través de lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone'

'Artículo 16.-...

...

*..La **averiguación previa** así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son **estrictamente reservados**.*

...

***Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa** o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal corresponda.*

...

Además, se considerará reservada aquella información relacionada con las actividades que el Ministerio Público lleva a cabo durante la etapa de la averiguación previa, es decir, en el lapso en que se realizan todas aquellas actuaciones y diligencias, necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito, a efecto de ejercer, o no, la acción penal.

En consecuencia no resulta posible dar información a la solicitud planteada, toda vez que asiste impedimento legal para proporcionar datos relativos a las averiguaciones previas, porque reviste características de confidencialidad o no



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

divulgable y a efecto de definir cuáles son esos parámetros, encuentran su sustento legal en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

'Artículo 14. También se considerará como información reservada:

...
III - Las averiguaciones previas;..'

De la transcripción anterior, se advierte que las actuaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, no tienen la calidad de registros públicos, ni pueden ser considerados como fuente de acceso al público.

En suma, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, motiva la información y la clasifica como reservada en términos de los artículos 45, primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción III de su Reglamento, por disposición expresa de la ley.

Además cabe precisar, que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ha establecido en su 'Criterio de interpretación de la fracción I del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental':

Que existe un principio general de derecho y de interpretación de la ley llamado 'principio de reserva de ley'. Dicho principio establece, que cuando el legislador, ya sea en su carácter de constituyente o de legislador ordinario, hace referencia a la regulación que se hace en otra 'ley', se entiende que se refiere a una ley en sentido formal y material, es decir, a un ordenamiento jurídico con las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, pero además que haya sido expedido a través del proceso legislativo establecido en la Constitución Mexicana.

Luego entonces, se insiste que el fundamento legal en que se apoya esta Subprocuraduría, para reservar su información deviene de una ley federal, como es la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada:

'Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el inculpado y su defensor, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas...'

Es una ley en sentido formal y material la que regula un sector concreto del ordenamiento jurídico, y bajo esa línea de pensamiento, se solicita que en este caso concreto se pondere la jerarquía normativa, que sustenta la reserva de la información planteada por esta Institución.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Otro impedimento jurídico que tiene esta autoridad para ventilar la información solicitada es lo previsto en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, que dispone:

'Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes.

XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos constancias o información que obren en una averiguación previa o en un Proceso penal y que Por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial confidenciales,...

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones...XXVIII..., se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil días de multa. (Nota: el subrayado no es de origen).

Bajo este contexto el servidor público que quebrante la reserva de la información al dar a conocer datos inmersos en averiguaciones previas, a quien no tiene derecho, incumpliría en lo preceptuado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito de Contra la Administración de Justicia, por lo que no es posible atender lo solicitado.

Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales en concordancia con el 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 27 de su Reglamento se determina que la información solicitada se considera reservada, haciéndose valer la imposibilidad jurídica para responder a la solicitud en cuestión. (sic)

Ahora bien, en atención a la interposición del recurso de revisión, se pidió pronunciamiento a la SEIDO, con la finalidad de contar con mayores argumentos respecto de los términos de la impugnación del recurrente.

A partir de lo anterior, es de concluirse que si bien el artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), dispone que el derecho de acceso a la información se encuentra garantizado por el Estado y toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública; también lo es que, según ordena el mismo precepto constitucional, existe información que podrá ser **reservada temporalmente por razones de interés público** en los términos que fijan las leyes.

Así, tal como lo establece la propia LFTAIPG en su artículo 14, fracción III las averiguaciones previas se consideran información clasificada como reservada. Es decir, que las indagatorias del orden criminal **materializan el interés público**, pues la finalidad de estas es garantizar el bien común de la sociedad.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En esa tesitura, las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, que contengan datos como denuncias, porqué motivos y quien las interpuso, delitos y fuentes de información en contra de algún inculpado, no tienen calidad de registros públicos, ni pueden ser considerados como fuente de acceso al público. Por tanto, la SEIDO clasificó como reservada la información solicitada en términos de los artículos 14, fracción III de la LFTAIPG, en relación con el artículo 16 del CFPP.

Asimismo, en la normativa citada se prevé como único supuesto de excepción para efectos de acceso a la información pública gubernamental, la entrega de una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el *Código Penal Federal*, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme, o bien cuando esta resulte de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido un delito. **SUPUESTO DE EXCEPCIÓN QUE EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, NO RESULTA APLICABLE.**

Luego entonces, como se señaló anteriormente la averiguación previa así como todos los documentos que la integren, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados y únicamente podrán tener acceso a ellos quien este legitimado para tal efecto conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 del CFPP, esto es el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal.

Derivado de lo expuesto, se advierte que no es procedente proporcionar la documentación requerida, al tratarse de información considerada como reservada.

Es de precisar que en el Derecho Penal no es admisible la interpretación toda vez que éste se determina conforme a la literalidad de las reglas en la clasificación de los ilícitos, por lo que no resulta procedente obligar a esta Institución a proporcionar información de averiguación previa alguna. Sustenta lo anterior la siguiente Tesis Jurisprudencial:

*Tesis: Jurisprudencia P./J. 100/2006.
(J), 9a Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXIV. Agosto de 2006: Pág. 1667*

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de 2006 Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Guitrón. Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede México Distrito Federal, a quince de agosto de dos mil seis.

[Énfasis añadido]

Luego entonces, el deber de esta Procuraduría, a través del Representante Social de la Federación, entre otros, es proteger el sigilo de las indagatorias en cualquiera de sus etapas, por lo que proporcionar información a quien no esté legitimado para ello, inclusive puede repercutir en responsabilidad penal, de conformidad con el artículo 225 fracción XXVIII, del Código Penal Federal.

En relación con lo anterior se debe señalar que la reserva de ley establecida por el artículo 16 del CFPP en cuanto a las averiguaciones previas, obedece a que dicha información **protege asuntos de interés general** (indagatorias del orden criminal), cuya difusión afecta a la sociedad en su conjunto Es decir, que **la averiguación previa es en sí misma una razón de interés público**, de ahí que la propia LFTAIPG en su artículo 14, fracción III le otorgue carácter de información reservada.

Consecuentemente, **en el caso en concreto, no resulta aplicable la excepción** prevista por el artículo 14 de la LFTAIPG, motivo por el cual subsiste la **clasificación de reserva** de la averiguación previa solicitada por el particular.

SEGUNDO. Ahora bien, el recurrente menciona que:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

'El mismo IFAI en el recurso ya resuelto con número de expediente RDA 5366/14 ante SEDENA indico que no importa que la información forme parte de una averiguación previa en curso y aun que pueda contener datos que vulneren la actuación del Ministerio Público Federal. Debe entregar la información debido a que existe un interés público que es superior a la reserva de la información dado que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.' (sic)

Al respecto, toda vez que si bien es cierto que el artículo 14, último párrafo de la LFTAIPG, establece que no se podrá invocar el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, también lo es que las investigaciones que realiza el Agente del Ministerio Público de la Federación en el presente caso, **no son por delitos de lesa humanidad, sino por delitos diversos**, entre ellos delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado, portación de arma de fuego, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior se corrobora con los boletines públicos oficiales de esta PGR, 210/14, 218/14, 225/14, 003/15, 005/15, 009/15 y 017/15, mismos que pueden ser localizados en los siguientes vínculos electrónicos:

• **Boletín 210/14**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b210%2014.shtm>

• **Boletín 218/14**

<http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Nov/b21814.shtm>

• **Boletín 225/14**

<http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Nov/b22514.shtm>

• **Boletín 003/15**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b00315.shtm>

• **Boletín 005/15**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b00515.shtm>

• **Boletín 017/15**

<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

De igual forma, cabe resaltar que la averiguación previa sigue abierta y se continúan realizando investigaciones, razón por la cual no resulta aplicable la excepción y **se debe proteger la reserva** de conformidad en lo previsto en el artículo 14, fracción III de la LFTAIPG. Lo anterior, pues garantizar el sigilo de la indagatoria, repercute en **proteger el interés público**.

Por otra parte, al día de hoy **no existe** una sentencia o un pronunciamiento de autoridad competente, como sería el Poder Judicial de la Federación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se determine que hubo violaciones graves a derechos humanos en el presente caso.

Más aún, en el comunicado de prensa **CGCP/046/15** de la CNDH, emitido el 2 de marzo de 2015, se estableció lo siguiente:

**'CNDH SUBRAYA QUE LAS VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS
HUMANOS DEBEN HACERSE PÚBLICAS**

- **La Constitución Mexicana establece claramente las facultades de la CNDH y del IFAI**
- **El Organismo nacional participó en las audiencias públicas convocadas por el Senado de la República**

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subrayó que los hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos deben ser del conocimiento público y no tener carácter reservado, afirmó hoy el Primer Visitador General, Ismael Eslava Pérez, quien puso en relieve que existe un órgano especializado encargado de la investigación de hechos violatorio a derechos humanos, quedando incluido aquéllos que éste determine como graves.

Al participar en las audiencias públicas organizadas por el Senado de la República para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señaló que la calificación de gravedad siempre debe estar sustentada en elementos mínimos indispensables que permitan llegar a esa determinación, razón por la cual no existe un momento específico para tal determinación.

'La facultad concedida al órgano garante del derecho de acceso a la información y la otorgada al órgano especializado para investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos, dijo debe ponderarse a la luz de lo expuesto, a fin de preservar un sistema armónico de atribuciones y competencias constitucionales.

Eslava Pérez puntualizó que la CNDH está convencida que el acceso a la información pública es inherente a un sistema democrático de derecho y, por



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

tanto, debe garantizarse su protección, particularmente en aquellos casos en que existan violaciones graves a derechos humanos

Tras precisar que la Constitución Mexicana establece una clara distinción entre las atribuciones que el artículo 6° concede al órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información pública, y las que el artículo 102, apartado B, confiere a la CNDH, puso de manifiesto que:

'La determinación de hechos violatorios a derechos humanos, así como la calificación que se haga sobre la gravedad de los mismos, son cuestiones que constitucionalmente están reservadas para la CNDH por ser la instancia que puede llevar a cabo la investigación de los mismos. Por tanto, la determinación deberá acontecer en el momento en que se cuente con los elementos mínimos indispensables, es decir, al inicio o durante el desarrollo de la investigación que realiza, aseguró.

'La calificación de violaciones graves a derechos humanos, añadió Eslava Pérez, se debe realizar con ponderación y proporcionalidad en relación con otros derechos atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad señalados en el artículo 1° de la Constitución General de la República'.

De igual manera, precisó que la calificación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos, en si misma hace que el acceso a la información sea pleno y que en ningún momento nadie pueda poner obstáculos para que la sociedad esté debidamente enterada de lo sucedido.

Finalmente, señaló que no existe discusión alguna sobre el acceso a la información tratándose de hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos.'

[Énfasis añadido]

A partir de lo que manifestó el Primer Visitador General de la CNDH, se colige que el IFAI no puede, por carecer de atribuciones al respecto, determinar si ciertos hechos constituyen violaciones graves a derechos humanos, pues ello es facultad exclusiva de la CNDH, según lo establece el artículo 102 apartado B de la CPEUM.

Cabe señalar que el Pleno de ese Instituto emitió la resolución al recurso de revisión RDA 5151/14, en la que determinó que en el caso de la averiguación previa relacionada con los hechos ocurridos en Iguala Guerrero el 26 de septiembre de 2014, hubo violación grave a derechos humanos.

En dicha determinación, el Pleno aludió a que el Poder Judicial de la Federación ya había establecido que el IFAI si era competente para determinar la violación grave a



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

derechos humanos, y por lo tanto determinó procedente la entrega de la averiguación
previa en cuestión.

Al efecto, conviene señalar que lo que ha establecido el Poder Judicial de la Federación,
mediante la sentencia dictada con motivo del juicio de amparo interpuesto en contra de
la resolución al recurso de revisión **RDA 0791/12 Bis**, votado por el Pleno del IFAI en
sesión del 4 de septiembre de 2013, en la cual **CONFIRMÓ** la reserva invocada por esta
PGR con motivo de los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y en
los que 72 migrantes perdieron la vida, es que el IFAI está facultado para aplicar *prima
facie*, la excepción a la reserva establecida en el artículo 14, último párrafo de la
LFTAIPG, pero únicamente para efectos del derecho de acceso a la información.

Lo anterior, según se desprende de la aludida sentencia, **no implica** que dicho IFAI sea
competente para determinar si ciertos hechos constituyen violación grave a derechos
humanos (lo cual es acorde con la manifestación pública oficial del Primer Visitador
General de la CNDH).

Es decir, que la aplicación *prima facie* del artículo 14, último párrafo de la LFTAIPG que
puede llevar a cabo el Pleno de ese Instituto, es **previo pronunciamiento de autoridad
competente en materia de derechos humanos**.

En ese tenor, si alguna autoridad competente, como puede ser la CNDH, hubiera emitido
algún pronunciamiento **calificando los hechos del 26 de septiembre de 2014 como
violaciones graves a derechos humanos**, el Pleno del IFAI podría, *prima facie* y sin
necesidad de llevar a cabo gestión, diligencia o procedimiento adicional alguno, ordenar
la entrega de la información. **Situación que a la fecha NO ha acontecido.**

No se omite precisar que, con motivo de la sentencia de amparo aludida previamente, se
promovió recurso de revisión de amparo, asunto que **aún se encuentra en estudio de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)**, pues ejerció su facultad de
atracción.

Ello, trae como consecuencia que, incluso, el IFAI al resolver el recurso de revisión RDA
5151/14, tomó en consideración elementos de un asunto que, actualmente, **no ha
causado estado** y no hay pronunciamiento firme por parte de la SCJN.

TERCERO. A partir de lo expuesto anteriormente, se advierte que en caso de
proporcionarse la información requerida, **se vulnerarían los derechos humanos de las
víctimas** (directas e indirectas) relacionadas con los hechos ocurridos en el Estado de
Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, **en claro detrimento a su derecho a la
privacidad, a su derecho de acceso a la justicia, así como a la reparación del daño
y al resguardo de su identidad**, previstos en los artículos 16, párrafo segundo, 17 y 20,
apartado C, fracciones IV y V de la CPEUM.

Sustenta lo anterior, la Tesis aislada P.LX/2000 Localización: [TA]: 9a. Época; Pleno;
S.J.F. y su Gaceta; XI, Abril de 2000; Pág. 74:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

**'DERECHO A LA INFORMACION. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO
TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO
POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.**

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como 'reserva de información' o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Amparo en revisión 3137/98 Bruno F. Villaseñor 2 de diciembre de 1999 Unanimidad de ocho votos Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede, y determino que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencia. México. Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil'.

En este orden de ideas, no debe pasar desapercibido para ese Instituto que de acuerdo a nuestro Estado de Derecho y conforme a nuestro sistema jurídico, no puede existir ninguna resolución administrativa que resuelva u ordene desobedecer algún mandato legal de reserva o confidencialidad aduciendo un 'interés público'.

Asimismo, si la reserva de información o su confidencialidad fue prevista por el legislador, corresponde al propio legislador adecuarla, modificarla o suprimirla del cuerpo normativo o bien al Poder Judicial Federal establecer el criterio de interpretación correspondiente, más no así a la autoridad administrativa.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

De lo anterior, podemos concluir que existe una obligación normativa que recae en el Instituto, pues por un lado debe velar por el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, pero por otro de igual forma proteger, salvaguardar y privilegiar el respeto a los derechos humanos de toda persona, en atención al artículo 1 de la CPEUM.

En ese sentido, al no distinguir en la norma qué derecho prevalece sobre el otro, ese Instituto debe de privilegiar los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014, atendiendo al **interés público** que contempla el artículo 14, fracción III de la LFTAIPG.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que el Instituto considere preponderar el derecho de acceso sobre los derechos de las víctimas e incluso, de los probables responsables, ese Pleno **no puede emitir una resolución, sin valorar el probable daño que se les haga a las personas involucradas, daño que puede ser irreparable y permanente.**

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted C. Comisionado:

PRIMERO.- En atención a las consideraciones señaladas en el presente curso tener por reconocida mi personalidad en el presente escrito de formulación de alegatos, y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

SEGUNDO.- En su oportunidad y previos los trámites legales se **CONFIRME** la respuesta otorgada por esta Institución, en términos de lo dispuesto en el artículo 56, fracción II, de la LFTAIPG.

[...] (sic)

IX. El 23 de marzo de 2015, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del Comisionado Ponente acordó la comparecencia a una reunión de acceso al sujeto obligado, con fundamento en los artículos 55 fracción III y 17 último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, así como en el Acuerdo del Pleno **ACT/11/03/2015.03.d).II**, a celebrarse el día 26 de marzo de 2015 en las instalaciones de este Instituto.

Derivado de lo anterior, se requirió al sujeto obligado para que presentara la documental que diera respuesta a lo solicitado por el hoy recurrente.

X. El 23 de marzo de 2015, mediante el sistema denominado Herramienta de Comunicación, el Comisionado Ponente notificó al sujeto obligado el acuerdo referido en el antecedente inmediato anterior.

XI. El 26 de marzo de 2015, se celebró en las instalaciones de este Instituto la diligencia de acceso a información, con la comparecencia del sujeto obligado, por



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

conducto del Subdirector de Área de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la República.

El acta del acceso que se levantó señala en su parte conducente lo siguiente:

"[...]"

Una vez abierto el acceso, el sujeto obligado, en uso de la palabra, señaló que no trae la documental solicita por el hoy recurrente, esto es, *"el listado y descripción de objetos, ropas, restos, casquillos y todo tipo de prueba pericial encontrados como evidencia del caso Ayotzinapa y si se tiene se me entregue fotos y copia de las actas con las constancias"* (sic); lo anterior, debido a que solicita el diferimiento del presente acto de acceso, entregando para ello copia simple del oficio número **SEIDO/DGAJCM/4374/2015**, de fecha 25 de marzo de 2015, suscrito por el Director de Área, adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el cual consta de dos fojas, y se adjunta en la presente acta como anexo único.-----

"[...]" (sic)

En congruencia con lo anterior, el sujeto obligado exhibió durante la diligencia de acceso a la información copia simple de oficio número **SEIDO/DGAJCM/4374/2015**, de fecha 25 de marzo de 2015, signado por el Director de Área, adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial, y dirigido al Subdirector de Área de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, ambos dependientes de la Procuraduría General de la República, en los siguientes términos:

"[...]"

Por este conducto, y en atención a su oficio **SJAI/DGAJ/03549/2015**, en el cual remite el acuerdo de 11 de marzo del año en curso, emitido por el Comisionado Ponente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, **FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS**, en donde notifica se debe comparecer a ese Instituto el próximo 26 de marzo, a las 17:30 horas, a una reunión de acceso a la información clasificada, en la cual se requiere la documental que da respuesta a la solicitud de información, con motivo del recurso revisión **RDA 0617/15**, relacionada con folio **0001700020815**, en las oficinas del Instituto, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur, número 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán.

Al respecto, como en su momento se manifestó, la información se encuentra afecta a una averiguación previa, por lo cual atendiendo a esa situación y por razones de seguridad, se solicita de su amable apoyo y comprensión con el objeto de hacer del conocimiento al Comisionado Ponente, que en virtud de lo voluminoso del expediente, cerca de 85 tomos y 13 anexos, aunado a que se continua con la práctica de diligencias ministeriales, el agente del Ministerio Público de la Federación requiere contar en todo



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

momento con el expediente de manera íntegra, en relación de ello, nos encontramos imposibilitados para realizar el traslado del expediente siendo conveniente que personal del Instituto de Acceso a la Información, se presente en las oficinas de esta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 75, segundo piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, con la Licenciada Catalina Aguilar Martínez, Coordinadora General adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, con la finalidad que realicen visita de verificación, el día y hora que considere conveniente.

Es importante señalar, que no existe negativa por parte de la Procuraduría General de la República y en particular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para proporcionar a esa ponencia la información, en consecuencia no hay intención alguna de incurrir en desacato.

Lo anterior con sustento en los artículos 17, último párrafo y 55 fracción VI, segundo párrafo de la Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental; 7 y 62, fracción III de su Reglamento.

[...]” (sic)

XII. El 24 de abril de 2015, tuvo verificativo la diligencia de acceso a la información, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, con la comparecencia del Subdirector de Área de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la República.

El acta del acceso que se levantó señala en su parte conducente lo siguiente:

“[...]”

Una vez abierto el acceso, el sujeto obligado, en uso de la palabra, señaló que tras consultar los términos de la solicitud, se considera que la expresión documental que da atención a la misma son las puestas a disposición en las que se hace la descripción de los indicios (objetos, ropas, restos y casquillos) para efectos de la investigación; las actas de cateo y las actas de inspección ministerial; mismas que se ponen a la vista para mejor proveer, y que obran en el expediente de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015.

Asimismo, es importante resaltar que en estos documentos se contienen diversos datos personales, que se consideran confidenciales, nombres de agentes del Ministerio Público Federal y peritos en diversas especialidades, quienes son personal sustantivo en materia de seguridad y, por lo tanto, respecto de sus nombres, resulta aplicable el Criterio 06/09 del Pleno del IFAI y determinados datos que servirán como punto de partida para iniciar líneas de investigación, en atención a las actividades de prevención y persecución de los delitos a cargo de esta Procuraduría General de la República:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Así, la referida documental es la siguiente:

Puesta a disposición			
Documento	Descripción	Número de fojas	Número de tomo o legajo.
Puesta a disposición de fecha 25 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Arma de fuego tipo pistola con un cargador abastecido.- Dos teléfonos celulares.- Credencial para votar con fotografía.- Tarjeta de Crédito.- 3 tarjetas pláticas.	12 (Foja 015 a 026)	1
Puesta a disposición, de fecha 25 y 26 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Un vehículo automotor.-Armas largas-Cartuchos-Armas punzocortante-Un teléfono celular	4 fojas (foliada de la 219 a la 222)	2
Puesta a disposición de fecha 4 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- 2 Credenciales para Votar- Mascada- Fajo de Billetes- 2 Teléfonos Celulares- 3 Teléfonos- Trozo de Papel, de los denominados "Post It"	15 (Foja 128 a 130)	3
Puesta a disposición de fecha 1 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Arma larga con un cargador, abastecido con 18 cartuchos.- Arma corta con un cargador abastecido con 8 cartuchos.- 6 teléfonos celulares.- 4 Billetes de denominación de 500 pesos.	6 (Foja 9 a 14)	5
Puesta a disposición de fecha 08 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Maleta color blanco, con colores azul y rojo.- Arma.- Cargador con 14 cartuchos.- Cargador con 25 cartuchos.- Envoltorio de material sintético color negro.- 2 celulares.- 1 cangurera de color negro.- 1 granada de guerra.- 66 bolsitas de material sintético, con polvo blanco en el interior.- 1 teléfono celular.	10 (Foja 9 a 18)	26



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Credencial de elector. - Vehículo - Envoltorio de material sintético, con hierba verde en su interior. - 2 celulares. - Envoltorio con 100 bolsitas de material sintético transparente, que en su interior contiene polvo blanco. - 1 Credencial de Elector. 		
De fecha 09 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> -Una maleta -Teléfonos celulares -Envoltorios -Numerario -Una granada. 	4 fojas (foliada de la 8 a la 11)	27
De fecha 09 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Tres armas de fuego -Un teléfono celular 	3 fojas (foliada de la 6 a la 8).	28
De fecha 13 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> -Tres teléfonos celulares -Una licencia de conducir -Una credencial oficial -Un arma larga -Un arma de fuego -Una licencia de manejo -Cuatro credenciales oficiales -Tres teléfonos celulares -Una lámpara -Un teléfono celular -Constancia de consulta del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública -Dos armas de fuego -Un cargador de arma corta -Esposas -Una lámpara -Una licencia de manejo -Un teléfono celular -Una licencia de manejo -Un teléfono celular -Esposas -Un arma larga -Dos cargadores de arma larga -Un teléfono celular -Tres credenciales oficiales -Esposas -Dos teléfonos celulares -Esposas 	10 fojas (foliada de la 4 a la 13).	29



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

	<ul style="list-style-type: none">-Cuatro credenciales oficiales-Un arma larga-Dos cargadores de arma larga-Cuatro credenciales oficiales-Dos teléfonos celulares-Un chip de teléfono celular-Dos credenciales oficiales-Un teléfono celular-Esposas-Credenciales oficiales-Un teléfono celular-Un arma larga-Un cargador de arma larga-Un arma de fuego-Una libreta-Tres credenciales oficiales-Un teléfono celular-Un arma larga-Cuatro cargadores de arma larga-Una bolsa de plástico con doce USB-Un teléfono celular-Credenciales oficiales-Dos teléfonos celulares-Un chip telefónico-Credenciales oficiales-Un arma larga-Un arma de fuego-Cargador de arma corta-Cargador de arma larga-Un teléfono celular-Un cargador de arma larga-Credenciales oficiales-Un teléfono celular-Licencia-Credenciales oficiales-Tres teléfonos celulares-Tres credenciales oficiales-Dos credenciales oficiales-Tres teléfonos celulares-Tres credenciales oficiales-Una credencial oficial-Un teléfono celular-Siete credenciales oficiales-Cuatro teléfonos celulares-Una radio de frecuencia		
--	--	--	--



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

	<ul style="list-style-type: none"> -Dos armas largas -Dos armas cortas -Nueve cajas de cartuchos -Catorce cargadores de arma de fuego -Una caja plástica de cartuchos -Bolsa plástica con cartuchos -Tres credenciales oficiales -Cuatro vehículos oficiales 		
De fecha 14 de octubre de 2014.	<p>Respecto de persona 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una billetera -Dos identificaciones -Numerario. <p>Respecto de persona 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Un teléfono celular -Tres identificaciones -Numerario. <p>Respecto de persona 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una billetera -Un teléfono celular -Una identificación- -Un objeto punzocortante -Una memoria de almacenamiento masivo -Dos chips telefónicos -Numerario. <p>Respecto de persona 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una mochila -Un teléfono celular -Una licencia de conducir -Dos identificaciones -Un cargador para celular y numerario. <p>Respecto de persona 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Un teléfono celular -Un monedero con numerario -Dos identificaciones. <p>Respecto de persona 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Un teléfono celular -Numerario -Una licencia de manejo 	4 fojas (foliada de la 349 a la 352).	30



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

	<ul style="list-style-type: none"> -Dos identificaciones -Un anillo. <p>Respecto de persona 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una billetera con numerario -Talones de pago -Una tarjeta para envío de dinero -Una CURP -Un anillo. <p>Respecto de persona 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una billetera -Dos identificaciones -Una licencia de manejo -Numerario. <p>Respecto de persona 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una billetera con numerario -Una licencia de manejo -Dos identificaciones -Un teléfono celular -Lentes de aumento. <p>Respecto de persona 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una billetera con numerario -Una licencia de manejo -Dos identificaciones -Un teléfono celular. 		
De fecha 15 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> -50 bolsitas con polvo blanco -200 bolsitas con polvo blanco -Numerario -Tarjeta de publicidad de espectáculos -299 bolsitas con sustancia color beige -Hierba verde y seca -Tres teléfonos celulares -Un pasaporte -Un vehículo automotor. 	4 fojas (foliada de la 592 a la 595).	30
De fecha 22 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> -Licencia de manejo -Teléfono celular -Tarjeta de crédito -Comprobante de pago -Credencial para votar 	4 fojas (foliada de la 613 a la 616).	37
De fecha 24 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> -Una credencial de elector -Un teléfono celular 	2 fojas (foliada de la 223 a la	38



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

		224)	
De fecha 31 de octubre de 2014	-Tres credenciales oficiales -Un oficio de comisión -Una relación de personal	2 fojas (foliada de la 163 a la 164)	44
De fecha 27 de septiembre de 2014.	-3 vehículos automotores.	3 fojas (foliada de la 893 a la 895) / Fotografías (foliada de la 897 a la 904).	47
De fecha 07 de noviembre de 2014.	-Un arma larga -Un teléfono celular	6 fojas (foliada de la 6 a la 11).	74
De fecha 10 de noviembre de 2014.	-Dos vehículos automotores -Certificados de necropsias -Palas -Artículos diversos de material plástico -Ropa -Teléfonos celulares -Casquillos -Armas cortas y largas	3 fojas (foliadas de la 5 a la 7)	49
Constancias Ministeriales, de fecha 27 de septiembre de 2014.	-Catorce teléfonos celulares	12 fojas (foliadas de la 402 la 413)	
Comunicado de Aseguramiento, Guardia y Custodia, de fecha 27 de septiembre de 2014	-19 vehículos automotores	4 fojas (foliadas de la 606 a la 609).	
Acuerdo Ministerial de puesta a disposición y aseguramiento de bienes, de fecha 27 de septiembre de 2014.	-97 armas largas -131 armas cortas	15 fojas (foliadas de la 613 a la 627)	

Cateos			
Documento	Descripción	Número de fojas	Número de tomo o legajo.
Dictamen de	-Un vehículo automotor	2 fojas	2



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

especialidad de fotografía forense.	-Un teléfono celular	(Foliadas de la 500 a la 501 / Fotografías (19 fojas, foliadas de la 503 a la 521)	
Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo de fecha 31 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Plástico en color negro con cinta canela adhesiva que contiene dos cargadores para cartuchos para arma de fuego.- Una estructura de cargador para cartuchos para arma de fuego.- Plástico en color negro con cinta canela adhesiva, que contiene un arma de fuego.- Tres armas de fuego.- Plástico en color negro con cinta canela.- Plástico en color negro con cinta canela adhesiva en color café, que contiene dos armas de fuego.- Plástico en color negro con cinta canela adhesiva en color café, que contiene un arma de fuego.	8 (Foja 321 a 328)	5
Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo de fecha 30 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Un rastrillo.- Un cepillo dental.	5 (Foja 343 a 347)	5
Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo de fecha 31 de octubre de 2014.	- Envoltorio confeccionado por material sintético negro y con cinta adhesiva en color café, que en su interior hay vegetal verde y seco	3 (Foja 362 a 364)	5
Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo de fecha 3 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 827 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 439 cartuchos, 3 aparatos de radiocomunicación y dos cargadores con carga.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 98 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 2,664 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 2,917 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su	17 (Foja 160 a 176)	6



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

	<p>respectiva tapa con 1,455 cartuchos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 1,789 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 1,750 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 1,544 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 1, 800 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 1,509 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 834 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 867 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 700 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 1,016 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 560 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 880 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 935 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 1,468 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 1,740 cartuchos.- Bote de plástico blanco, con su respectiva tapa con 1,556 cartuchos.- Tinaco de material sintético, en color negro, en cuyo interior se encontraron los siguientes indicios:<ul style="list-style-type: none">* 6 aparatos de radiocomunicación,5 chamarras de color negro, 1 pasamontañas, accesorios para equipo táctico y unas esposas.* Material Bélico consistente en lo siguiente: 8 armas de fuego.* Material Bélico consistente en lo siguiente: 11 tipos de cartuchos para armas de diferentes calibres.* Material Bélico consistente en lo siguiente: 3 tipos de cargadores		
--	---	--	--



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República**
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

	<p>para cartuchos de arma de fuego.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Material Bélico consistente en lo siguiente: culatas, empuñaduras, mira anterior para arma de fuego. - Tinaco de material sintético, en color negro, en cuyo interior se encontraron los siguientes indicios: * Camisolas, pantalones, chamarras y pasamontañas. * Accesorios tipo táctico. * Material Bélico consistente en: 9 armas de fuego. * Material Bélico consistente en lo siguiente: 15 tipos de cartuchos para armas de diferentes calibres. * Material Bélico consistente en lo siguiente: 28 tipos de cargadores para cartuchos de arma de fuego. 		
Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo de fecha 4 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - 3 radios - Diversos documentos - Cargador para cartuchos - 49 cartuchos - Chamarra color negro - 40 cartuchos - 50 cartuchos. - Cargador para cartuchos, y dos tipos de cartuchos. - 15 cartuchos. - 1 chip para celular, - Dos tipos de cartuchos. - 19 Cartuchos. 	5 (Foja 181 a 185)	6
Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo, de fecha 21 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Dos laptops - Un recibo de CFE 	3 fojas (foliada de la 331 a la 333).	37
Dictamen en materia de genética forense, de fecha 23 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Una gorra negra - Lata de aluminio - Una botella de material sintético transparente - Un filtro color blanco sucio - Fragmentos de tela 	2 Fojas de la 373 a la 374 / 1 Anexo con fotografías (13 fojas, de la 385 a la 397).	38
Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo, de fecha 23 de octubre de 2014.	- Cuatro dispositivos de videograbación	6 fojas (Foliada de la 76 a la 81)	



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo de fecha 31 de octubre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Plástico en color negro con cinta canela adhesiva que contiene dos cargadores para cartuchos para arma de fuego. - Una estructura de cargador para cartuchos para arma de fuego. - Plástico en color negro con cinta canela adhesiva, que contiene un arma de fuego. - Tres armas de fuego. - Plástico en color negro con cinta canela. - Plástico en color negro con cinta canela adhesiva en color café, que contiene dos armas de fuego. - Plástico en color negro con cinta canela adhesiva en color café, que contiene un arma de fuego. 	8 (Foja 053 a 60)	44
Dictamen en balística forense, de fecha 03 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> -Bolsa color negro que contiene con dos cargadores y una estructura de cargador. -Bolsa color negro que contiene cuatro armas de fuego. -Bolsa color negro que contiene dos armas de fuego. -Bolsa color negro que contiene tres armas de fuego. 	16 fojas (foliada de la 475 a la 490).	44
Dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense.	-23 vehículos	18 fojas (foliadas de la 665 a la 682)	49
Dictamen en materia de balística forense, de fecha 08 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> -Un arma de fuego -Un cargador 	4 fojas (foliada de la 72 a la 75).	74
Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo, de fecha 27 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> -Tres teléfonos celulares -Placas de circulación de automóvil -Documentación diversa 	7 fojas (foliada de la 553 a la 559).	
Inspección Ministerial, de fecha 28 de noviembre de	<ul style="list-style-type: none"> -Seis teléfonos celulares -Nueve tarjetas de almacenamiento de datos 	1 foja (folio 568).	



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

2014.	-Una memoria de almacenamiento masivo		
-------	--	--	--

Inspecciones Ministeriales			
Documento	Descripción	Número de fojas	Número de tomo o legajo.
Acta Circunstanciada respecto de la búsqueda y recolección de indicios en el Río San Juan en la localidad de Puente Río San Juan, Municipio de Cocula, Estado de Guerrero, de fechas 29, 30 y 31 de octubre de 2014.	-Bolsa de material sintético color negro con restos óseos. -	3 fojas (foliada de la 34 a la 36)	2
Acta de inspección y fe ministerial de indicios, de fecha 17 de noviembre de 2014.	-Vehículo automotor -Credencial de elector -Tres credenciales de identificación -Un fragmento de camisa de bala	1 foja (folio 260)	8
Acta de inspección y fe ministerial de indicios, de fecha 17 de noviembre de 2014.	-Casquillo metálico -Vestuario diverso que incluye equipamiento policiaco -Permiso vehicular	2 fojas (foliada de la 266 a la 267)	
Acta de inspección y fe ministerial de indicios, de fecha 17 de noviembre de 2014.	-Documentación diversa	1 foja (folio 276)	
Acta de inspección y fe ministerial de indicios, de fecha 17 de noviembre	-Documentación diversa -Ropa -Cartera con numerario	2 fojas (foliada de la 266 a la 267)	



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

de 2014.	<ul style="list-style-type: none">-Una mochila-Un fragmento de camisa de bala-Una bala		
Acta circunstanciada respecto de la búsqueda y recolección de indicios en el Municipio de Iguala de la Independencia Guerrero, de fecha 15 de Noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Camisa deformada	3 (Fojas 211 a 213)	8
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial, practicada en el basurero denominado tiradero municipal asilo abierto, de fecha 15 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Fragmentos de neumático.- Montículo de escombros.- Fragmentos de roca, piedra, ladrillos, metalizados y alambón.- Escombros de piedra semi calcinada.- Muestra de tierra.- Casquillos.	2 (Fojas 214 a 215)	8
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios en vehículo, de fecha 17 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- 1 Credencial para votar.- 3 Gafetes.- 1 Fragmento de camisa de bala.	(Foja 260)	8
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios en vehículo, de fecha 17 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- 1 Casquillo- 4 gorras- 1 chaleco antibalas- Permiso Vehicular- Fornitura.- 1 Bastón- 2 Lentes- Sombrero- 1 prenda tipo cubre cuello.	2 (Fojas 266 a 267)	8



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República**
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios en vehículo, de fecha 17 de noviembre de 2014.	- Documentación diversa.	1 (Foja 276)	8
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios en vehículo, de fecha 17 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Carpeta con diversos documentos.- Documentos diversos.- Credencial con fotografía.- Camisa.- Bermuda.- Playera.- Cartera.- Mochila.- 2 prendas de vestir.- Fraseda.- Fragmento de camisa de proyectil.- Bala.	1 (Fojas 288 a 289)	8
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios de vehículo, de fecha 20 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Indicios localizados en un vehículo:* Tarjeta de circulación.* Carta Topográfica.* 2 Cuadernillos tamaño carta.* 10 folletos.* 2 hojas tamaño carta, en las que se puede apreciar que se trata de la caratula de póliza de seguro.* 1 hoja tamaño carta, en las que se puede apreciar que se trata de una factura.* 1 hoja tamaño carta, en la que se puede apreciar que se trata de una nota de remisión.	3 (Foja 196 a 198)	11



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

	<ul style="list-style-type: none">* 1 hoja tamaño carta, en la que se puede apreciar que se trata de un comprobante de operaciones.* 3 trozos de papel.* 1 bidón de plástico.		
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios de vehículo, de fecha 20 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Indicios localizados en un vehículo:* 1 mochila de tela en cuyo interior venía:* 1 Toalla de tela* 1 impermeable* 1 pasamontañas* 1 juego de esposas con llave* 1 forniture con funda* 2 bolsas* 2 cargadores de pared par celular.* 1 lámpara de mano* 1 estuche* 1 par de lentes* 1 bolsa negra en cuyo interior venía:6 Chaleco de tela.	2 (Foja 214 a 215)	11
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios de vehículo, de fecha 20 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Indicios localizados en un vehículo:* 3 Credenciales de Alumno.* Credencial emitida por el IFE.	2 (Foja 220 a 221)	11
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios de vehículo, de fecha 20 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none">- Indicios localizados en un vehículo:* 1 cartucho para arma de fuego.* Documentación diversa.* 1 radio y batería.	3 (Foja 227 a 229)	11
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios de vehículo, de fecha	<ul style="list-style-type: none">- Indicios localizados en un vehículo:* 3 radios.* 1 gorra, 2 chalecos balísticos, 2	2 (Foja 257 a 258)	11



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República**
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

20 de noviembre de 2014.	cinturones tácticos y 1 careta. * Documentación diversa.		
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios de vehículo, de fecha 20 de noviembre de 2014.	- Indicios localizados en un vehículo: * 2 radios de comunicación. * 1 batería. * 1 portallaves. * Documento diverso * 3 Chalecos antibalas. * 1 Chamarra. * 2 Chalecos. * 1 Gorra. * 2 Fornituras. * 2 Impermeables.	4 (Foja 265 268)	11
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios de vehículo, de fecha 20 de noviembre de 2014.	- Indicios localizados en un vehículo: * Diversa documentación	2 (Foja 322 a 323)	
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios de vehículo, de fecha 20 de noviembre de 2014.	- Indicios localizados en un vehículo: * Diversa documentación	5 (Foja 354 a 358)	11
Diligencia de Inspección y Fe Ministerial de indicios de vehículo, de fecha 20 de noviembre de 2014.	- Indicios localizados en un vehículo: * Diversa documentación	16 (Fojas 372 a 387)	11
Acta de inspección y fe ministerial de indicios, de fecha 20 de noviembre de 2014.	-Tres libretas de escritura -Una cartera de documentos -Un radio -Dos mochilas	11 fojas (foliada de la 6 a la 16).	12



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

	-Un chaleco -Una fornitura		
Acta de inspección y fe ministerial de indicios, de fecha 21 de noviembre de 2014.	-Documentación diversa -Una gorra -Un bat de madera	7 fojas (foliada de la 199 a la 205).	
Acta de inspección y fe ministerial de indicios, de fecha 29 de noviembre de 2014.	-Equipamiento policiaco -Equipos de telecomunicación -Documentación diversa	6 fojas (foliada de la 232 a la 237).	
Acta circunstanciada respecto de la búsqueda y recolección de indicios en el basurero Municipal de Cocula Guerrero, de fecha 27 de octubre de 2014.	- Cartuchos. - Casquillos. - Restos de neumático. - Fragmento de malla metálica. - Botella Metálica - Restos de un balón. - Restos de alambre. - Lentes oscuros. - 1 Playera. - Restos Óseos. - Botones. - Evillas. - Bolsas. - Cabello. - Maíz. - Cartón. - Carbón. - Moneda. - Plástico.	7 (Fojas 7 a 13)	14

Una vez consultada la referida documentación, en presencia de los servidores públicos que fungen como testigos para los fines establecidos en los artículos 17 y 55 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, queda en su totalidad en posesión del sujeto obligado, para todos los efectos legales conducentes.-----

[...]” (sic)

XIII. Al día de la presente resolución, no se recibieron en este Instituto alegatos por parte del recurrente.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República**
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

CONSIDERANDOS

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo ordenado en el artículo 6o, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 2014; en el artículo 3o, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2014; así como lo dispuesto en los artículos 37, fracción II, 49, 50 y 55, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002; los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003; así como los artículos 15, fracciones I y III, 21, fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2014; así como el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por el que se modifica la denominación de este Instituto, por la de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 2010.

Segundo. El particular presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República, por medio de la cual requirió, señalando como modalidad la de "Entrega por Internet en el Infomex", el listado y descripción de objetos, ropas, restos, casquillos y todo tipo de prueba pericial encontrados como evidencia, en relación con el caso Ayotzinapa, así como fotos y copias de las actas con las constancias, si se tienen.

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, manifestó que los datos solicitados se encuentran inmersos en una averiguación previa, por lo que ostentan el carácter de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

reservado, por lo que no era posible su entrega, bajo ninguna circunstancia, por un **período de doce años**, de conformidad con lo establecido los artículos 14, fracción III y 15 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, 30 de su Reglamento.

En suma de lo anterior, el sujeto obligado señaló que la reserva también se sustenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*, el cual señala que la averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, relacionados con esta, son **estrictamente reservados**.

Asimismo, precisó que el precepto jurídico en cuestión establece que el servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa, quedará sujeto al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal correspondiente.

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado manifestó que no resultó posible otorgar la información peticionada, toda vez que existe un impedimento legal para proporcionar datos relativos a las averiguaciones previas, en virtud de que éstas reúnen características de confidencialidad.

En este orden de ideas, también señaló que lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, mismo que señala que las actuaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, no tienen la calidad de registros públicos, ni pueden ser considerados como fuente de acceso al público.

A mayor abundamiento, la Procuraduría General de la República refirió que este Instituto ha establecido en su "Criterio de interpretación de la fracción I del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*", que existe un principio general de derecho y de interpretación de la ley llamado "principio de reserva de ley"; mismo que establece que cuando el legislador, ya sea en su carácter de constituyente o de legislador ordinario, hace referencia a la regulación que se hace en otra "ley", se entiende que se refiere a un ordenamiento jurídico en sentido formal y material, es decir, con las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, pero además que se expidió a través del proceso legislativo establecido en la Constitución Mexicana.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En este sentido, el sujeto obligado precisó que el fundamento legal en que se apoyó esa Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para reservar la información de mérito, deviene de una Ley Federal, como lo es la *Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada*; instrumento jurídico que señala, en su artículo 13, que las actuaciones de una averiguación previa por los delitos a que se refiere ese cuerpo normativo, sólo deberán tener acceso el inculcado y su defensor, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares deben guardar la mayor reserva.

En adición a lo antes relatado, el sujeto obligado manifestó que otro impedimento jurídico para otorgar la información solicitada es lo dispuesto en el artículo 225, fracción XXVIII del *Código Penal Federal*, precepto jurídico que señala que son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obre en una averiguación previa o un proceso penal, y que por disposición jurídica o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales.

En suma de lo antes señalado, el sujeto obligado manifestó que en términos del artículo 31 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, no resultó procedente pronunciamiento alguno por parte del Comité de Información, ya que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no se encuentra sujeta a la autoridad del referido Comité, para efecto de declarar la reserva de la información solicitada.

No obstante lo anterior, y atendiendo al principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, el sujeto obligado señaló que la información con carácter público con la que cuenta se encontraba disponible para su consulta a través de los boletines números 180/14, 182/14, 184/14, 187/14, 191/14, 192/14, 193/14, 194/14, 195/14, 197/14, 198/14, 199/14, 201/14, 207/14, 210/14, 212/14, 214/14, 218/14, 225/14, 228/14, 240/14, 003/15, 005/15, 009/15 y 017/15, respecto de los cuales proporcionó el vínculo electrónico para su consulta.

Inconforme, el hoy recurrente manifestó como agravio la reserva de la información solicitada; en este sentido, precisó que este Instituto en el recurso de revisión número **RDA 5366/14** interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que no importaba que la información formara parte de una averiguación



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

previa en curso, ni que pudiera contener datos que vulneren la actuación del Ministerio Público Federal, debiendo la dependencia entregar la información, toda vez que existe un interés público superior a la reserva de la información invocada, lo anterior en virtud de que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, tal y como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En congruencia con lo anterior, y como parte integral de su recurso de revisión, el sujeto aludió al siguiente vínculo electrónico:

<http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Nota%20IFAI-011-15.pdf>.

En este sentido, el particular relacionó el vínculo electrónico de referencia, al recurso de revisión en el que este Instituto señaló la inaplicabilidad de la reserva de información, en relación al caso Ayotzinapa.

Posteriormente, mediante su escrito de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta inicial a la solicitud de acceso que nos ocupa, y realizó las siguientes manifestaciones:

- Que la solicitud de información se turnó para su atención a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, misma que manifestó la imposibilidad jurídica para entregar la misma.
- Que si bien el artículo 6, apartado A, fracción I de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* garantiza el derecho de acceso a la información por parte del Estado, y señala que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública; también lo es que dicho precepto constitucional establece la existencia de información que puede ser susceptible de **reservarse temporalmente por razones de interés público** en los términos que fijen las leyes respectivas.
- Que el artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* dispone que las averiguaciones previas se consideran información clasificada como reservada.
- Que la ley prevé como único supuesto de excepción para efectos de acceso a la información pública, la entrega de una versión pública de la resolución del no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

dispuesto en el *Código Penal Federal*; supuesto de excepción que en el caso en concreto, no resultó aplicable.

- Que únicamente pueden tener acceso a la averiguación previa, las personas que se encuentren legitimadas para tal efecto, siendo éstas el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*.
- Que uno de los deberes de esa Procuraduría, a través del Representante Social de la Federación, es proteger el sigilo de las indagatorias en cualquiera de sus etapas, por lo que proporcionar información a quien no esté legitimado para ello, podría derivar en una responsabilidad penal.
- Que la reserva de ley establecida por el artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*, en relación con las averiguaciones previas, obedece a que dicha información protege asuntos de interés general, y su difusión afectaría a la sociedad en su conjunto, es decir, que la averiguación previa es en sí misma una razón de interés público, por lo que derivado de ello la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* en su artículo 14, fracción III le otorga el carácter de información reservada.
- Que en el caso en concreto, no resultó aplicable la excepción prevista por el artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, motivo por el que quedó subsistente la clasificación de reserva de la averiguación previa solicitada por el peticionario.
- Que si bien es cierto el multicitado artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* en su último párrafo establece que no se puede invocar el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad; también lo es que en el caso que nos ocupa, las investigaciones que realizó el Agente del Ministerio Público de la Federación **no son por delitos de lesa humanidad, sino por delitos diversos**, entre ellos delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado, portación de arma de fuego, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En este sentido el sujeto obligado manifestó que lo anterior podía corroborarse con los boletines públicos oficiales números 210/14, 218/14, 225/14, 003/15, 005/15, 009/15 y 017/15 de esa Procuraduría.

- Que al día de la formulación de los alegatos que nos ocupan, la averiguación previa sigue abierta y se continúan realizando investigaciones, aunado a que no existe una sentencia o un pronunciamiento de autoridad competente, como el Poder Judicial de la Federación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se hubiese determinado que existieron violaciones graves a derechos humanos en el caso que nos ocupa, por lo que debía protegerse la reserva de la información.
- Que mediante el comunicado de prensa número **CGCP/046/15**, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 02 de marzo de 2015, se manifestó que los hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos deben ser del conocimiento público y no tener carácter reservado.
- Que en dicho comunicado, se manifestó que la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* establece una clara distinción entre las atribuciones que el artículo 6° concede al órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información pública, y las que el artículo 102, apartado B, confiere a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En este sentido, también se precisó que la determinación de hechos violatorios a derechos humanos, así como la calificación sobre su gravedad, son cuestiones constitucionalmente reservadas para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ser la instancia que puede llevar a cabo la investigación de los mismos.

- Que a partir de lo manifestado por el Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se coligió que este Instituto carece de atribuciones para determinar si determinados hechos constituyen violaciones graves a derechos humanos, siendo una facultad exclusiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 apartado B de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que el Pleno de este Instituto emitió la resolución al recurso de revisión RDA 5151/14, en la que determinó que en el caso de la averiguación previa relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, existieron violaciones graves a derechos humanos.

En este sentido, en dicha determinación, el Pleno de este Instituto señaló que el Poder Judicial de la Federación ya había establecido que este Órgano Garante era competente para determinar la violación grave a derechos humanos, por lo que determinó procedente la entrega de la averiguación previa en cuestión.

- Que el Poder Judicial de la Federación estableció, mediante sentencia dictada con motivo del juicio de amparo interpuesto en contra de la resolución al recurso de revisión RDA 0791/12 Bis, votado por el Pleno de este Instituto, en la cual se confirmó la reserva invocada por esa Procuraduría General de la República con motivo de los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y en los que 72 migrantes perdieron la vida; es que este órgano se encuentra facultado para aplicar *prima facie*, la excepción a la reserva establecida en el artículo 14, último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, pero únicamente para efectos del derecho de acceso a la información.

Así las cosas, el sujeto obligado señaló que lo anterior no implicaba que este Instituto fuese competente para determinar qué hechos constituyen o no violaciones graves a derechos humanos, lo cual es acorde con lo manifestado por el Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

- Que con motivo de la sentencia de amparo aludida previamente, se promovió recurso de revisión de amparo, asunto que aún se encuentra en estudio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que ejerció su facultad de atracción.

En este orden de ideas la Procuraduría General de la República señaló que este Órgano al resolver el recurso de revisión RDA 5151/14, tomó en consideración elementos de un asunto que, actualmente, no ha causado estado y tampoco existe un pronunciamiento firme por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que la aplicación *prima facie* del artículo 14, último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* que puede llevar a cabo el Pleno de este Instituto, debe ser previo pronunciamiento de autoridad competente en materia de derechos humanos.
- Que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos o alguna autoridad competente hubiera emitido algún pronunciamiento calificando los hechos del 26 de septiembre de 2014 como violaciones graves a derechos humanos, el Pleno de este Instituto podría, *prima facie* y sin necesidad de llevar a cabo gestión, diligencia o procedimiento adicional alguno, ordenar la entrega de la información, hecho que en el caso en concreto no ocurrió.
- Que en caso de proporcionarse la información requerida, se vulnerarían los derechos humanos de las víctimas (directas e indirectas) relacionadas con los hechos ocurridos en el Estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, en claro detrimento a su derecho a la privacidad, acceso a la justicia, así como a la reparación del daño y al resguardo de su identidad.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Procuraduría General de la República solicitó se **confirmara** la respuesta otorgada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

En este orden de ideas, este Instituto acordó una comparecencia de acceso a la información clasificada, en la cual se requirió al sujeto obligado para que presentara la documental que diera contestación a la solicitud del particular.

Derivado de lo anterior, tuvo verificativo la diligencia de acceso a la información clasificada, en la que el sujeto obligado manifestó que no se exhibió la documental solicitada por el recurrente, consistente en: "...el listado y descripción de objetos, ropas, restos, casquillos y todo tipo de prueba pericial encontrados como evidencia del caso Ayotzinapa y si se tiene se me entregue fotos y copia de las actas con las constancias. Gracias."; sin embargo, solicitaba el diferimiento de la diligencia.

En razón de la referida petición de diferimiento de la diligencia de mérito, el sujeto obligado exhibió copia simple del oficio número **SEIDO/DGAJCM/4374/2015**, de fecha 25 de marzo de 2015, signado por el Director de Área, adscrito a la Dirección



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

**General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.**

En este sentido, mediante el oficio aludido, dicho servidor público manifestó que por razones de seguridad y en atención a lo voluminoso de la averiguación previa de mérito, la cual se señaló constaba con aproximadamente de 85 tomos y 13 anexos, aunado a que se continuaba con la práctica de diligencias ministeriales, el agente del Ministerio Público de la Federación requería contar en todo momento con el expediente íntegro, por lo que se encontraban imposibilitados para efectuar el traslado del expediente de mérito a este Instituto.

Así las cosas, por conducto del oficio de referencia, se solicitó el traslado de personal de este Instituto a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, a efecto de llevar a cabo la diligencia de acceso a la información correspondiente.

Derivado de lo anterior, tuvo verificativo la diligencia de acceso a la información en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente del sujeto obligado, en la que se tuvo a la vista la averiguación previa número **PGR/SEIDO/EUIDMS/01/2015**.

Como consecuencia de lo anterior, el sujeto obligado señaló que derivado del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información del particular, y la revisión minuciosa de la indagatoria de mérito, se advirtió que la expresión documental que daría atención a la petición de referencia, serían las puestas a disposición, documentales estas en las que consta la descripción de los indicios (objetos, ropas, restos y casquillos), así como las actas de cateo y las actas de inspección ministerial.

En relación con lo antes expuesto, también se asentó que las referidas documentales contienen diversos datos personales considerados como confidenciales, y nombres de agentes del Ministerio Públicos Federal y peritos en diversas especialidades, quienes ostentan el carácter de personal sustantivo en materia de seguridad, por lo que les resulta aplicable el Criterio número 06/09, emitido por el Pleno de este Instituto.

Aunado a lo anterior, se refirió que los documentos en cuestión contienen diversos datos que, en su caso, servirían para iniciar líneas de investigación, en atención a



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

las actividades de prevención y persecución de los delitos a cargo de esa Procuraduría General de la República.

Así, este Instituto tuvo acceso a los documentos reseñados en el antecedente XII de la presente resolución.

Derivado de lo anterior, este Instituto analizará el agravio manifestado por el hoy recurrente en su recurso de revisión, en función de la respuesta notificada por la Procuraduría General de la República; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Tercero. Una vez expuesto lo anterior, en el presente considerando se abordará el marco normativo que resulta aplicable a la estructura y atribuciones de la Procuraduría General de la República, en relación con la materia de la solicitud de mérito.

Al respecto, la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*² establece lo siguiente:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

...

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

...

Artículo 102.

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. **El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.** Para ser procurador se requiere:

² Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República**
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculcados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

De nuestra Carta Magna, se advierte que la investigación y persecución de los delitos federales corresponde al Ministerio Público de la Federación, el cual será el encargado de ejercer la acción penal ante los tribunales.

Así las cosas, y en relación con la materia de la solicitud que nos ocupa, la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*³ dispone lo siguiente:

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Artículo 2. Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

³ Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPGR.pdf>.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República**
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

A) En la averiguación previa:

...

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

...

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

...

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

...

h) Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;

...

n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

ñ) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;

...

r) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables;

s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;
2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;
3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;
4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;
5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y
6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;

B) Ante los órganos jurisdiccionales:

a) Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querrela, esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia.

Cuando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se ejercitará ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito;

c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley;

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación;

e) Solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, para acreditar el delito y la responsabilidad del inculpado, de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la ley de la materia y demás disposiciones aplicables.

II. Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, utilizando dispositivos tecnológicos adecuados para alimentar



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

las bases de datos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas
jurídicas aplicables y los acuerdos del Procurador General de la República, así como
consultar, analizar y explotar la información sobre seguridad pública contenida en dichas
bases de datos;

...

Artículo 22. Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación:

...

b) La Policía Federal Ministerial;

...

De lo anterior, se desprende que la Procuraduría General de la República estará a
cargo del Procurador General de la República, quién dirige al Ministerio Público de la
Federación, a quien le corresponde la investigación y persecución de los delitos del
orden federal.

Ahora bien, dentro de la averiguación previa, le corresponde al Ministerio Público de
la Federación, entre otras funciones, las siguientes:

- **Practicar todas aquellas diligencias que sean necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres ámbitos de gobierno.**
- **Obtener elementos probatorios, solicitar a particulares su aportación voluntaria, y cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención**
- **Realizar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.**
- **Solicitar al órgano jurisdiccional órdenes de cateo, imposición del arraigo, prohibición de abandonar una demarcación geográfica y otras medidas cautelares.**
- **Practicar las diligencias de cateo.**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

- **Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables.**
- **Determinar el no ejercicio de la acción penal cuando los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito alguno; cuando desahogadas las diligencias y medios de prueba no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado; la acción penal se hubiese extinguido; se advierta una causa de exclusión del delito y resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito.**

Asimismo, la Procuraduría General de República tiene el deber de ejercer la acción penal ante los órganos jurisdiccionales cuando exista denuncia o querrela, siempre que se haya acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien o quienes hubieran intervenido, solicitando ordenes de aprehensión o de comparecencia; poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley; **aportar pruebas y promover diligencias para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que se hubiese cometido; así como solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio cuando para ello se necesite la intervención de la autoridad judicial, con el fin de acreditar el delito y la responsabilidad del indiciado.**

Cabe señalar, que la averiguación previa solicitada a la cual se tuvo acceso, se encuentran compuesta por diversas constancias que permiten conocer las actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público durante la investigación, tales como declaraciones, puestas a disposición, inspecciones ministeriales, dictámenes en materias de medicina forense, tecnologías, fotografía, genética, de Tránsito Terrestre e Identificación Vehicular, balística, solicitudes de arraigo, acuerdos de retención de inculpadados, informes de partes policiales, actas de cateo, entre otras; que de acuerdo con la normatividad que rige al sujeto obligado, son elementos esenciales para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

Cuarto. En este sentido y con el objeto de conocer los hechos que dieron origen a la averiguación previa vinculada a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, es importante señalar que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, así como integrantes del equipo de futbol "Los Avispones de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Chilpancingo", fueron agredidos y, a consecuencia de ello, se ocasionó la muerte de 6 personas, 30 fueron lesionados y 43 personas fueron reportadas como desaparecidas.⁴

Asimismo, se ha señalado que entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre del 2014, se produjeron en Iguala, Guerrero, una secuencia de hechos de violencia contra estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, que iniciaron cuando un grupo de estudiantes salían de la central de autobuses desde la referida localidad a la ciudad de Chilpancingo; a partir de ese momento, agentes de la policía municipal, presuntamente en colusión con personas vinculadas al crimen organizado, habrían atacado a dicho grupo. Estos graves hechos de violencia, dejaron un saldo de 6 personas muertas (3 estudiantes del referido centro educativo, uno de ellos con presuntos signos visibles de tortura, dos futbolistas y una mujer); al menos 14 estudiantes heridos, algunos de gravedad; y 43 estudiantes cuyo paradero aún se desconoce.⁵

Ahora bien, en relación con dichos hechos es necesario traer a colación la información pública oficial relacionada con las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República, debiéndose precisar que no se describirá la totalidad de los boletines otorgados en vía de respuesta al particular, sino únicamente aquéllos que se consideran más relevantes, a efecto de resolver lo que en derecho proceda.

↓ Boletín 191/14, del 14 de octubre de 2014.⁶

**"DETIENEN A 14 PERSONAS MÁS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN LA
DESAPARICIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS**

El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam indicó que en el transcurso de este día se efectuó la detención de 15 personas más, presuntamente involucradas, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 14 de estas se desempeñan como elementos de la Policía del Municipio de Cocula, Guerrero.

⁴ Comunicado de Prensa CGCP/356/14, del 22 de diciembre de 2014, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

⁵ Comunicado de prensa No. 117/14, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de octubre de 2014.

⁶ Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/boi14/Oct/b19114.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Del mismo modo, informó que el alcalde de ese municipio se encuentra declarando en calidad de testigo al igual que el director de Seguridad Pública de esa localidad.

El titular de la Procuraduría General de la República, precisó que los detenidos, son aparte de los 22 elementos de la Policía Municipal de Iguala, consignados por la Procuraduría estatal, y que el número 15 es un empleado administrativo de la Policía de Cocula, y que fue él, quien falsificó las bitácoras de las patrullas para ocultar que habían ido a Iguala y que fueron alteradas, al cambiarle la cromática de los números a los vehículos oficiales para que no fueran identificados. "Todo esto está ya perfectamente documentado y pleno para presentarse".

Hasta el momento, continuó, independientemente de tener cerca de 50 detenidos, lo que tenemos son a los operadores que se encargaron de la detención y el traslado (de los normalistas) hasta entregarlos al grupo delictivo que opera en la zona.

En conferencia de prensa Jesús Murillo Karam informó que en las primeras fosas encontradas, ya existen algunos resultados y "les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes; el encuentro de estas fosas nos confirma el nivel de peligrosidad de este grupo que opera en la región. Asimismo confirmó el hallazgo de una fosa más en la cercanías de Iguala y en la cual ya se encuentra trabajando personal pericial de la Agencia de Investigación Criminal.

Como se observa, el 14 de octubre de 2014, el sujeto obligado informó, entre otras cuestiones, que se había efectuado la detención de 15 personas más presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; de éstas 14 se desempeñaban como elementos de la Policía del Municipio de Cocula, Guerrero y una de ellas era un empleado administrativo de la referida policía, quien falsificó las bitácoras de las patrullas para ocultar que habían ido a Iguala y que fueron alteradas al cambiar la cromática de los números a los vehículos oficiales para que no fueran identificadas, lo cual se encontraba perfectamente documentado y pleno para presentarse.

Hasta el momento sólo se tenía a los operadores que se encargaron de la detención y traslado (de los normalistas) hasta entregarlos al grupo delictivo que operaba en la zona.

↓ Boletín 198/14, del 22 de octubre de 2014.⁷

⁷ Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

**"CONFERENCIA DE PRENSA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA,
JESÚS MURILLO KARAM, SOBRE SUCESOS EN IGUALA, GUERRERO**

JESÚS MURILLO KARAM.- Señores, buenas tardes.

Si ustedes me permiten, voy a hacerles un relato que complementa toda la averiguación e investigación, que le dé un contexto completo a toda la averiguación.

A la PGR le fue turnada por la Fiscalía General de Justicia de Guerrero el 5 de octubre, la averiguación previa relacionada con los sucesos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre, esto significa que el día de hoy, la Procuraduría de la República lleva 17 días con la investigación.

A manera de contexto, hay que recordar que Arturo Beltrán Leyva fue abatido en Cuernavaca en el 2009 y entonces era el líder del grupo delictivo de Los Beltrán Leyva, a su muerte, su grupo se divide y se crean varios bandos, entre ellos, el de Guerreros Unidos, estos dos grupos, estos grupos, no son dos, son cuatro, han venido disputándose áreas de influencia, principalmente en el estado de Guerrero, el grupo principal de controversia con éste es el de Los Rojos.

El 18 de octubre del 2014, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría capturó a Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, quien ha aportado información en torno a los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre.

A partir de esta detención y después de sus declaraciones, se ha logrado establecer una línea de investigación que hoy comparto con ustedes.

Si recuerdan, en un principio teníamos varias líneas de investigación, hoy tenemos una línea de investigación; el grupo delincuencia autodenominado Guerreros Unidos había tejido una red de complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad municipal. En el caso concreto de Iguala, esta complicidad abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local con Guerreros Unidos.

Este grupo delictivo, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del propio líder del grupo, recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, mensual, bimensual, semanal, de los cuales, cuando menos 600 mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local, además de que el grupo delincuencia decidía los nuevos ingresos de los integrantes como policías municipales.

Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca y el Secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República**
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

También, como se ha informado, la señora Pineda Villa es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva.

Como antecedente directo es importante señalar, en julio de 2013 la alcaldía de Iguala, ya con José Luis Abarca como presidente municipal, fue agredida en un conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata.

De acuerdo con los antecedentes y las declaraciones de integrantes del ayuntamiento, en este incidente de hace más de un año participaron estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Ya entrando en los hechos acontecidos el 26 de septiembre en Iguala, podemos referir que alrededor de las 18 horas, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos abordan en Ayotzinapa dos camiones Estrella de Oro con destino a Iguala, que arriban a Iguala alrededor de las 21 horas, los estudiantes toman dos unidades adicionales, esta vez de la empresa Costa Online, hubo resistencia del chofer de una tercera unidad de esta misma empresa, al cual lesionaron, en ese momento los estudiantes contaban con los dos camiones obtenidos en Chilpancingo, más los otros dos obtenidos en Iguala.

En adición a las lesiones reportadas al conductor del camión de pasajeros, algunos relatan otro incidente enfrente de un lavado de autos, también en la ciudad de Iguala, donde resultó herida una dependiente, esta línea de investigación, sublínea de investigación sigue abierta.

Según testimonio de los "halcones", informantes, del grupo delictivo Guerreros Unidos y elementos de la Policía de Iguala, reportan al Centro de Control de Iguala el arribo de estudiantes de Ayotzinapa y de algunas otras personas, esto fue declarado por el funcionario local David Hernández Cruz, adscrito al área de Protección Civil y Seguridad Pública de Iguala, quien estaba a cargo del Centro de Control de la Policía de Iguala.

Este funcionario local inicia el levantamiento de los reportes y envío de las comunicaciones a las unidades de la policía de Iguala.

Aunado a las declaraciones de quien dirigía el Centro de Control de la Policía Municipal de Iguala, se suman las declaraciones de Marco Antonio Ríos Verde, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y de policías detenidos, quienes asumieron que el grupo que se aproximaba, se dirigía a sabotear la celebración que se realizaría, que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividades.

En las declaraciones de los detenidos se precisa que podría repetirse, pensando ellos que podría repetirse el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013 en la alcaldía de Iguala, se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Los mismos detenidos declaran que la orden de enfrentar a las personas les llega por radio desde la Central y se les dice que viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala.

Entre ambas policías bloquean la carretera y evitan el desplazamiento de los autobuses en que se movían los estudiantes, en ese primer incidente, un policía municipal priva de la vida con arma de fuego a uno de los estudiantes.

Al existir esta agresión, parte del grupo de los estudiantes que se aproximaba y otros sujetos, intentan darse a la fuga en un camión, por lo que la policía de Iguala empieza el rastreo de la unidad que había logrado escapar.

En la confusión reinante, la Policía de Iguala detiene y dispara al autobús que transportaba al equipo de fútbol "Los Avispones de Chilpancingo", al darse cuenta del error, los libera, minutos después detienen el camión que se había escapado.

El grupo de detenidos es ingresado a la Central de Policía de Iguala y tiempo después son sustraídos de esa dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala, se tiene acreditado que el subjeefe de la policía de Cocula, César Nava, estaba también a las órdenes de los Guerreros Unidos y existe una línea de investigación para averiguar si esta penetración del crimen organizado en Cocula llegó a niveles superiores.

Para tratar de encubrir sus hechos delictivos, la policía de Cocula cambió el balizado de sus unidades y alteró las bitácoras y fatigas de hechos relevantes, cuestión que fue detectada por los peritos de la Procuraduría de la República, ya que se tienen a la mano las bitácoras originales que fueron encontradas en un chaleco en la policía Municipal de Cocula, además de que se ubicó el taller donde se cambió la numeración e las patrullas, mismo hecho que fue ratificado con un examen pericial, tienen ahí en la pantalla las fotos

En este momento, el grupo de personas en el que se presume estaban algunos estudiantes, son subidos a una camioneta de redilas blanca y toman un camino de terracería que los lleva a la zona de Pueblo Viejo, en esta coyuntura, Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, es contactado por su lugarteniente conocido como "El Gil", este último reporta vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndolos al grupo delictivo contrario.

Ante ello, Sidronio Casarrubias avala las acciones para, entre comillas, la defensa de su territorio de influencia en Iguala.

El camino de terracería que toman los delincuentes para llevar al grupo de personas retenidas ilegalmente es muy conocido por "El Gil", él vive en esa zona, ahí está su vivienda, misma que también es muy cercana al paraje donde se encontraron, primero seis fosas y en total nueve.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Además, el día 9 de octubre en el patio de la casa de "El Gil", se encontró una camioneta de redilas blancas que presuntamente se utilizó para el traslado de las personas retenidas, esto es cuando ese día 9 la Procuraduría General de la República hace un cateo de su casa.

En estas fosas se han realizado dos exámenes periciales; los dos primeros, uno realizado por la PGR y otro por la Policía Federal, se basaron en muestras genéticas que nos entregó la Fiscalía General de Guerrero, los resultados de esos primeros exámenes resultaron negativos para identificar a los estudiantes no localizados.

El tercer peritaje, viene siendo realizado por forenses argentinos que coadyuvan en la investigación, ellos tomaron muestras directas a los familiares de los estudiantes y estamos en espera de los resultados, estos resultados serán fundamentales para corroborar o no la muestra que nos fue entregada por la Fiscalía guerrerense.

...

De todo lo anterior ¿qué se acredita?

Con las declaraciones obtenidas, las investigaciones realizadas, los peritajes hechos, lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de las policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo delincencial que ya está muy señalado, con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala, con motivo del informe de la segunda.

En resumen, se tiene acreditado el modo de operar y los móviles del grupo delictivo de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula; se tiene acreditado el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias a las elementos; se tiene acreditado el lugar donde los detenidos fueron entregados a este grupo delincencial; se tiene plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada, además se están concluyendo diligencias para acreditar el delito de funcionarios municipales de desaparición forzada.

Se tiene detenido al líder del grupo delincencial Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, que se encuentra ya recluso en el CEFERESO número 1 del Altiplano; se solicitaron las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, la señora Pineda Villa y el Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre, independientemente de la consignación que se les ha hecho por el homicidio de Arturo Hernández Cardona en mayo de 2013.

Hoy ya se tienen identificados, por lo menos a tres de los integrantes del grupo delincencial Guerreros Unidos, que recibieron a los retenidos por los policías de Cocula e Iguala, y asimismo, conocemos el camino por el cual fueron internados a un paraje.

...



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Con las investigaciones realizadas se tienen detenidas y consignadas a 52 personas entre policías locales, funcionarios municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, de quien incluso se capturó a su líder máximo.
..." (sic)

El 22 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República dio a conocer un relato para establecer el contexto de la averiguación previa que se llevaba, destacándose que el 5 de octubre de 2014 le fue turnada por la Fiscalía General de Justicia de Guerrero la averiguación previa relacionada con los sucesos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre del mismo año.

❖ El 18 de octubre de 2014, se capturó a Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal Guerreros Unidos quien había aportado información en torno a los hechos ocurridos en Iguala. A partir de dicha detención y después de sus declaraciones, se logró establecer una línea de investigación, de la cual es posible advertir, **en relación con lo sucedido el 26 de septiembre de 2014, entre otras cuestiones lo siguiente:**

- Que alrededor de las 18 horas del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos abordaron en Ayotzinapa dos camiones Estrella de Oro con destino a Iguala, que arribaron a dicha ciudad alrededor de las 21 horas, y los estudiantes toman dos unidades adicionales de la empresa Costa Online.
- Que de acuerdo con el testimonio de los "halcones", informantes, del grupo delictivo Guerreros Unidos y elementos de la Policía de Iguala, reportan al Centro de Control de Iguala el arribo de estudiantes de Ayotzinapa y de algunas otras personas, esto fue declarado por el funcionario local David Hernández Cruz, adscrito al área de Protección Civil y Seguridad Pública de Iguala, quien estaba a cargo del Centro de Control de la Policía de Iguala, el cual inicia el levantamiento de los reportes y envío de las comunicaciones a las unidades de la policía de Iguala.
- Que de las declaraciones de Marco Antonio Ríos Verder, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y de policías detenidos, asumieron que el grupo que se aproximaba se dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en esos momentos por María de los Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividades.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que en las declaraciones de los detenidos se precisaba que pensando ellos que podría repetirse el escenario de conflicto sucedido en junio de 2013 en la alcaldía de Iguala, se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula, y que la orden de enfrentar a las personas les llega por radio desde la Central y se les dice que viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala.
- Que entre ambas policías bloquean la carretera y evitan el desplazamiento de los autobuses en que se movían los estudiantes, en ese primer incidente, un **policía municipal priva de la vida con arma de fuego a uno de los estudiantes**, y parte del grupo de los estudiantes que se aproximaba y otros sujetos intentan darse a la fuga en un camión, por lo que la policía de Iguala empieza el rastreo de la unidad que había logrado escapar.
- Que la Policía de Iguala detiene y dispara al autobús que transportaba al equipo de fútbol "Los Avispones de Chilpancingo", al darse cuenta del error, los libera, minutos después detienen el camión que se había escapado.
- Que el grupo de detenidos es ingresado a la Central de Policía de Iguala y tiempo después son sustraídos de esa dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala.
- Que en este momento, el grupo de personas en el que se presumía estaban algunos estudiantes, son subidos a una camioneta de redilas blanca y toman un camino de terracería que los lleva a la zona de Pueblo Viejo, en esta coyuntura, Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, es contactado por su lugarteniente conocido como "El Gil", este último reporta vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndolos al grupo delictivo contrario, por lo que, Sidronio Casarrubias avala las acciones para, entre comillas, la defensa de su territorio de influencia en Iguala.
- Que en las fosas encontradas se habían realizado dos exámenes periciales uno por el sujeto obligado y otro por la Policía Federal, basándose en muestras genéticas que entregó la Fiscalía General de Guerrero; los resultados de esos primeros exámenes resultaron negativos para identificar a los estudiantes no localizados. Mientras que el tercer peritaje se venía



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

realizando por forenses argentinos que tomaron muestras directas a los familiares de los estudiantes y se estaba a la espera de los resultados.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, se tenía acreditado, entre otros, los móviles del grupo delictivo de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula, a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada, y además se estaban concluyendo diligencias para acreditar el delito de funcionarios municipales de desaparición forzada.

Por otro lado, se indicó que se solicitaron órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, Pineda Villa y el Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales. Y se tenían detenidas y consignadas a 52 personas entre ellos policías locales y funcionarios municipales.

✚ Boletín 212/14, del 7 de noviembre de 2014.⁸

"CONFERENCIA DE PRENSA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA,
JESÚS MURILLO KARAM

...
JESÚS MURILLO KARAM, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.- Hoy se cumplen 33 días desde que la Fiscalía de Guerrero declinó la competencia y le turnó a la Procuraduría General de la República la investigación sobre los hechos delictivos ocurridos entre el 27 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han sido 33 días muy difíciles y dolorosos, sobre todo para quienes no saben el paradero de sus hijos, pero también 33 días en los que no se ha dejado un día sin que haya habido una acción de búsqueda, sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del Gobierno de la República.

...
En la anterior conferencia les precisé que teníamos detenidos a quienes privaron de la vida a seis personas en Iguala el 26 de septiembre y también a los que detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron al grupo de personas de la organización criminal Guerreros Unidos. Se detuvo a Sidronio Casarrubias Salgado, quien es el líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula, además, se logró la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la decisión que originó este doloroso evento, el ex presidente municipal de Iguala y su esposa.

⁸ Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21214.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Hoy a unos días de esta conferencia hay más avances. Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa (a) "El Pato" y de Jonathan Osorio Gómez (a) "El Jona", quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala del Progreso en el estado de Guerrero. Estas dos aprehensiones derivaron en la localización y detención en Cocula de una tercera persona de nombre de Agustín García Reyes (a) "El Chereje". En pantalla se encuentran las fotos de los tres detenidos.

Los tres capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula.

El Gobierno de la República comparte con las familias y la sociedad en general, la necesidad de dar transparencia a esta investigación y por ese motivo hemos considerado la importancia de hacer del conocimiento público, paso a paso, los avances dados en primer término a las familias que sufren las consecuencias de la desaparición, pero también a una sociedad agraviada por un acto delictual que no se puede permitir y que no se debe repetir.

...

Los testimonios y confesiones que hemos recabado, aunadas al resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula.

En la búsqueda de la verdad, mi obligación es seguirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa.

...

Veamos los avances paso por paso:

Como podemos apreciar en el mapa, el grupo de jóvenes salió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzipana, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala, posteriormente se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de una empresa.

El ex presidente municipal de Iguala, quien tenía designado en la comunicación interna de la policía municipal el código "A-5", fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de la central de radio de la policía municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación.

Es en este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.

El ex presidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades frente al DIF municipal.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Después del primer incidente que sufren los normalistas y al continuar su camino en los autobuses, elementos de la policía municipal de Iguala los retiene con violencia y los traslada a la central policiaca, desde ese punto y con apoyo de la Policía Municipal de Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote, la cual también está señalada en el mapa que se muestra.

Ha quedado acreditado por las investigaciones del Ministerio Público Federal que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los detenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

En la investigación que nos fue remitida por la Fiscalía de Guerrero, se aseguraba que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en donde se señalaba, se les había sepultado. Hasta el momento, los peritajes realizados nos han permitido tener la certeza de que los restos encontrados en esas primeras fosas, las de Pueblo Viejo, no son las de los jóvenes estudiantes y también se ha logrado determinar la plena identificación de cuatro de las personas que se encontraban en esas fosas, las cuales fueron asesinadas en el mes de agosto, es decir, un mes antes de los hechos.

Incluso se encontraron restos que correspondían a mujeres, mientras que el grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa estaba constituido sólo por varones, hechos de los que se ha iniciado una investigación y en este momento ya podemos determinar que policías municipales de Iguala se encuentran involucrados en el homicidio de estos cuatro cuerpos identificados en las primeras fosas de Cerro Viejo.

En esa coyuntura, el hoy detenido, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de ese grupo criminal, como lo refiere en su declaración, fue contactado por su lugarteniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como "El Gil", quien le informó vía mensaje celular, los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario. Casarrubias Salgado fue quien avaló las acciones para, entre comillas, defender su territorio.

Pueden ver en pantalla las fotografías de los señalados y me interesa que vean en específico la de Gildardo López Astudillo, conocido como "El Gil", porque es la primera vez que se publica y para esta Procuraduría sería de la mayor importancia la colaboración del público en la búsqueda de este individuo. La foto, en un momento más la verán y si me permiten, continúo, las más recientes detenciones entre las que figuran los tres autores materiales mencionados nos han permitido conocer la última etapa de la cadena delictiva que hasta este momento tenemos.

Los últimos tres detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración, en más de 40 personas, esta es parte de su declaración.

Como observamos en el mapa, en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limita el acceso al público o al predio.

En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de "halcón" informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía él la encomienda de vigilar. Dos de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron al basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración.

Los documentos, los detenidos perdón, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos; hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre.

Por el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos, sino hasta cerca de las 5 y media de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes.

Corroboran estos dichos las declaraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes en su declaración ante el Ministerio Público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal, identificado como la unidad 01, fueron interceptados por dos de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran, esta versión fue en un primer momento narrada por dos de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quienes además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de modo propio en razón de tener temor a represalias. Viendo todo esto, entiende uno ese temor.

Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

apodan "El Terco", de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas.

Fuerzas federales, investigadores y peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos, como ustedes lo acaban de ver en las imágenes, hicieron en el Río San Juan una búsqueda exhaustiva, en esta búsqueda y en el cumplimiento de su deber, por desgracia para las instituciones, falleció ahogado un elemento de la Policía Federal. Buzos de la Armada de México y peritos tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido, una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos, que hoy podemos confirmar que por sus características corresponden a restos humanos. Les pido sigan viendo las imágenes.

A decir de los peritos, el alto nivel de degradación causado por el fuego a los restos encontrados, hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación, sin embargo, no agotaremos esfuerzos, no los escatimaremos hasta agotar todas las posibilidades científicas y técnicas. Los peritos, tanto de la Procuraduría General de la República como los forenses argentinos en un esfuerzo exhaustivo, continuarán sus trabajos hacia la identificación.

Para avanzar en la eventual identificación de estos restos humanos, los equipos forenses han recomendado que los estudios se realicen en los laboratorios más altamente especializados del mundo. Luego de varias videoconferencias y llamadas a distintos laboratorios, se acordó realizar estudios denominados mitocondriales, los equipos periciales coincidieron que el mejor lugar para practicar estos estudios sería la Universidad de Innsbruck en Austria.

Reitero que la investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas localizadas en el Río San Juan; mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación.

Para el 07 de noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República en conferencia de prensa señaló sobre el avance del caso, que anteriormente se había informado que se tenía detenidos a quienes privaron de la vida a seis personas en Iguala el 26 de septiembre de 2014, así como a los que detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron al grupo de personas de la organización criminal Guerreros Unidos, y que se había logrado la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la decisión que originó el suceso, esto es al ex presidente municipal de Iguala y a su esposa.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Asimismo, que tres de las capturas miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula.

Por otro lado, que los testimonios y confesiones recabados, aunado a las investigaciones realizadas, apuntaban al homicidio de un amplio número de personas en Cocula.

Aunado a lo anterior, sobre los avances del caso se mencionó que después del primer incidente que sufrieron los normalistas y al continuar su camino en los autobuses, elementos de la policía municipal de Iguala los retienen con violencia y los trasladan a la central policiaca, desde ese punto y con apoyo de la Policía Municipal de Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula estando acreditado por las investigaciones del Ministerio Público Federal que en dicho punto, los policías municipales entregaron a los detenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

En lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, los detenidos indicaron que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para, posteriormente, dirigirse al basurero de ese Municipio.

Por otra parte, los detenidos señalaron que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y, posteriormente, los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos; el fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos y otro que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Asimismo, que recibieron la orden de quien apodan "El Terco", de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura negras, las cuales fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas.

Fuerzas federales, investigadores y peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos, y peritos tanto mexicanos como argentinos encontraron restos de las bolsas y su contenido, una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos, que podía confirmarse que por sus características corresponden a restos humanos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Los equipos forenses recomendaron que los estudios se realicen en los laboratorios más altamente especializados del mundo, coincidiendo que el mejor lugar sería la Universidad de Innsbruck en Austria.

✚ Boletín 240/14, del 7 de diciembre de 2014.⁹

"MENSAJE A MEDIOS DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, JESÚS MURILLO KARAM, POR SUCESOS EN IGUALA Y COCULA, GUERRERO

...

JESÚS MURILLO KARAM.- Quiero dar las gracias por su presencia.

Hoy me he permitido convocarlos para dar a conocer los resultados de las pruebas científicas realizadas por la Universidad de Innsbruck, que fueron recibidos el día 4 de este mes por la Procuraduría General de la República y el equipo argentino de antropología forense.

Si me permiten hago un breve resumen de la investigación.

Se ha logrado la detención y consignación de 80 responsables de estos indignantes hechos. En este episodio se incluye el homicidio de seis personas en los acontecimientos de Iguala del 26 de septiembre y los resultados de fosas encontradas que también estamos investigando para determinar quiénes son los culpables.

Entre los detenidos están los que detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron a la organización criminal autodenominada Guerreros Unidos a un grupo de personas, sumando estos al día de hoy, 44 elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula, detenidos y 16 más ya identificados que están siendo buscados.

La detención de Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal que corrompió e infiltró a las policías municipales, de ambos municipios y quien según refiere él mismo en su declaración ministerial, fue contactado por su lugarteniente Gildardo López Astudillo, conocido como "El Gil", informándole lo que estaba sucediendo en Iguala, este último ya está identificado y es buscado por esta Procuraduría, y por todas las policías federales.

La detención del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, quienes tenían el mando y tomaron las decisiones que originaron este reprobable evento.

Hoy José Luis Abarca Velázquez ha sido consignado a un penal federal por la comisión de diversos delitos, y se integra otra averiguación por su participación junto con su esposa y policías, por la desaparición forzada de estudiantes y ciudadanos que se ha venido determinando durante la averiguación.

⁹ Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Dic/b24014.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Se hicieron públicas las detenciones de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez, Agustín García Reyes, miembros también de la organización criminal, quienes según sus propias declaraciones, junto con los detenidos, Benito Vázquez Martínez y Salvador Reza Jacobo, así como 11 personas más aún no detenidas, de las cuales me reservo mayores datos por lo que pueden ustedes entender, recibieron, trasladaron, ejecutaron e incineraron a un grupo de numeroso de personas para deshacerse posteriormente de sus restos.

En total, según las investigaciones, participaron en esta etapa de los acontecimientos, al menos 16 personas, de las cuales hemos detenido a cinco; se detuvo a Darío Morales Sánchez, quien participó en el encubrimiento de los detenidos antes mencionados, posteriormente la detención de César Nava González, Subdirector de la Policía de Cocula, quien recibió la petición de apoyo por parte del Subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien también se encuentra prófugo, de apoyar en la detención de personas en la ciudad de Iguala, participando directamente en la privación ilegal de la libertad de éstas y su traslado hacia la brecha conocida como Loma del Coyote, donde fueron entregados a integrantes de la organización criminal, subidos a dos camionetas y trasladados al basurero de Cocula.

Se encuentra abierta la investigación respecto de los demás funcionarios del ayuntamiento para determinar el grado de su responsabilidad, el día de hoy quedan pendientes de cumplimentar órdenes de aprehensión vigentes y en los próximos días se solicitarán otras en contra de personas que hemos logrado identificar y determinar su modo de participación y antes quienes anteriormente sólo se tenía referencia por sus apodos.

Esto es importante que lo vean, para que vean el lugar donde fue el basurero, para ver la profundidad del lugar, el aislamiento, como podrán ver, no hay una sola casa a kilómetros a la redonda, el acceso es por una brecha muy angosta que incluso tiene una puerta de seguridad a cinco, seis kilómetros de este espacio.

JESÚS MURILLO KARAM.- Como se recordará, tres de los detenidos señalaron que aproximadamente 13 o 14 horas después de iniciado el fuego, se les ordenó juntar los restos de cenizas y triturar los huesos que no se alcanzaron a calcinar por completo, acto que realizaron para posteriormente juntar las cenizas con palas y otros accesorios dentro de ocho bolsas de plástico que fueron llevadas hasta el río San Juan, en donde seis de ellas fueron vaciadas y dos lanzadas sin abrir.

Al realizar la búsqueda en el Río San Juan, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, asistidos por elementos de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, así como peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal, con base en las declaraciones de los responsables y las evidencias que constan en el expediente, encontraron diversas bolsas con características que fueron las que nos habían descrito los detenidos durante su declaración inicial, una de ellas sin



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

abrir, contenía residuos de cenizas y restos calcinados que por sus características corresponden a restos humanos.

Al analizar el contenido de una, de la bolsa plástica, la única que estaba completa, encontrada en el río San Juan, fueron hallados residuos, cenizas y elementos óseos, parte de los residuos encontrados en la bolsa pertenecen también a restos metálicos de neumáticos conocidos como radiales, similares a los encontrados en el basurero de Cocola.

Además se identificó, entre otros, un fragmento de tejido óseo que corresponde a la parte del esqueleto humano denominada "el ala mayor estenoide", dicha muestra fue una de las 17 que los peritos mexicanos y argentinos mandaron para su estudio en la Universidad de Innsbruck, por presentar la mayor viabilidad para obtener un perfil de ADN.

La muestra fue sometida junto con otras 16 a procedimientos de extracción de ADN nuclear, es decir, el núcleo de la célula, utilizando una técnica altamente sensible. Esta muestra solo dio un resultado positivo. Los estudios de la Universidad continúan para tratar de obtener muestra que puedan dar resultados mediante medios científicos con otras técnicas de investigación forense.

En las fotos podrán ver ustedes como en toda esta investigación, que está filmada, que está grabada, casi en su totalidad, se ha respetado, cuidando que la cadena de custodia sea segura, podrán ver ustedes los lugares en los que va empacada, etiquetada, y en todos los casos con una cantidad enorme de testigos.

El perfil genético completo que se extrajo de esta muestra, fue sometido a procedimientos comparativos, utilizando como referencia las muestras proporcionadas por la PGR y por el equipo argentino de antropología forense, consistentes en los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos, dando correspondencia con uno de los grupos familiares.

Con base en los datos establecidos por la Universidad de Innsbruck, se determinó que dicha muestra corresponde a un varón que, leo textual: es al menos un billón, con "b", billón de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio, en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado.

Voy a entregarles, es muy largo el dictamen para que lo lea aquí, pero les voy a leer solo una parte:

Los análisis de ADN de la muestra -esta es una traducción lo más literal posible- los análisis de ADN de la muestra ósea y está el número, arrojaron un perfil genético masculino en los 16 lopsi utilizado, perfil genético de ADN del padre y de los dos hermanos de la persona desaparecida de nombre Alexander Mora Venancio, fueron



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

proporcionados por, como ya señalé, la PGR y el equipo argentino, los datos obtenidos por GMI son concordantes con los proporcionados por la PGR y el equipo argentino.

Dice, los datos genéticos nucleares obtenidos de esa muestra son consistentes con los restos humanos no identificados, pertenecientes a un hijo biológico del padre, lo señala con número, y de los hermanos, los señala con otro número.

Basados en los datos de la frecuencia, y dice anélica, de la población caucásica establecida por el GMI, bajo la hipótesis de que los datos genéticos nucleares obtenidos del fragmento óseo sean de un hijo biológico del padre y un hermano, es un billón de veces más probable en comparación con la de cualquier otro individuo no relacionado.

Por lo anterior, se concluye que de acuerdo con el resultado emitido por la Universidad de Innsbruck, Austria, que la muestra ósea del estudio corresponde a Alexander Mora Venancio, estudiante normalista de 21 años de edad, quien pertenece al grupo de desaparecidos de los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Por instrucciones directamente del Presidente de la República, los resultados completos del dictamen emitido por la Universidad de Innsbruck, en el idioma inglés en que fueron presentados, así como una traducción certificada por peritos expertos, están siendo puestos a disposición de los coadyuvantes nombrados por los familiares de los desaparecidos, quienes han tenido acceso al expediente en todo momento. Asimismo, esta información estará disponible el día de hoy, para los medios de comunicación nacionales y extranjeros.

Esta prueba científica confirma que los retos encontrados en una de las escenas coincide con la evidencia de la investigación, y con la declaración ministerial de los detenidos, en el sentido de que en dicho lugar y forma se privó al grupo de personas en los términos y señalamientos que se dan en la averiguación.

Hay más evidencias que no voy a mencionar en este momento, porque tengo que comunicarlás primero, como fue el acuerdo con los padres, con los propios padres de familia, y en el momento en que lo hayamos hecho, se las presentaré a ustedes.

La identificación positiva de ADN, unida al resto de la evidencia y las declaraciones ante el Ministerio Público de la Federación por parte de los inculpados, refuerza la reconstrucción histórica de lo acontecido en Cocula.

El 07 de diciembre de 2014, el Procurador General de la República comunicó un resumen de la investigación, del cual se destaca lo siguiente:

- Se había logrado la detención y consignación de 80 responsables de los hechos. En dicho episodio se incluye el homicidio de seis personas en los acontecimientos de Iguala del 26 de septiembre.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Entre los detenidos estaban los que detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron a la organización criminal Guerreros Unidos a un grupo de personas, sumando éstos al día en que se informaba, 44 elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula, detenidos y 16 más ya identificados que están siendo buscados.
- La detención del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes tenían el mando y tomaron las decisiones que originaron el reprochable evento.
- José Luis Abarca Velázquez en la fecha en que se informaba había sido consignado a un penal federal por la comisión de diversos delitos, y se integraba otra averiguación por su participación junto con su esposa y policías, por la desaparición forzada de estudiantes y ciudadanos que se había venido determinando durante la averiguación.
- Según las investigaciones, en total participaron en dicha etapa de los acontecimientos, al menos 16 personas, de las cuales se habían detenido a cinco; a Darío Morales Sánchez, quien participó en el encubrimiento de los detenidos antes mencionados; posteriormente César Nava González, Subdirector de la Policía de Cocula, quien recibió la petición de apoyo por parte del Subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien también se encontraba prófugo, de apoyar en la detención de personas en la ciudad de Iguala, participando directamente en la privación ilegal de la libertad de éstas y su traslado hacia la brecha conocida como Loma del Coyote.
- Al realizar la búsqueda en el Río San Juan, se encontraron diversas bolsas al analizar el contenido de la única bolsa que estaba completa, fueron hallados residuos, cenizas y elementos óseos.
- Se identificó, entre otros, un fragmento de tejido óseo que corresponde a la parte del esqueleto humano denominada "el ala mayor estenoide", dicha muestra fue una de las 17 que los peritos mexicanos y argentinos mandaron para su estudio en la Universidad de Innsbruck.
- La muestra fue sometida junto con otras 16 a procedimientos de extracción de ADN nuclear, es decir, el núcleo de la célula, utilizando una técnica altamente sensible, la cual solo dio un resultado positivo a uno de los grupos familiares, de la persona desaparecida de nombre Alexander Mora Venancio, quien pertenece al grupo de desaparecidos de los hechos del 26 de septiembre.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

➔ Boletín 005/15, del 13 de enero de 2015.¹⁰

**"TOMÁS ZERÓN INFORMA RESULTADOS DE REUNIÓN ENTRE PADRES DE
NORMALISTAS DE AYOTZINAPA Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL**

...

TOMÁS ZERÓN DE LUCIO.- Buenas noches, el día de hoy, se realizó una reunión en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la ciudad de México, entre los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y funcionarios de este Gobierno Federal.

...

Los funcionarios de la Procuraduría General de la República expusieron las líneas de investigación que se llevaron a cabo durante la investigación, destacando la exposición de peritajes y dictámenes científicos que obran en autos, y de los cuales se desprende que las declaraciones de los involucrados, específicamente de quienes participaron en la última etapa de los hechos, que tienen sustento y que fueron el día 26 de septiembre.

Además, les fue presentado un video -que en su momento será dado a conocer a la opinión pública- en donde se detalló paso a paso el resultado de la investigación, destacando la detención de 97 personas al día de hoy, así como la cronología de los eventos el día de los hechos, de acuerdo a las declaraciones y la reconstrucción narrada por los hoy ya consignados.

Desde el primer día, el Gobierno Federal tuvo conocimiento legal e inició las investigaciones, se han integrado más de 82 tomos y 13 anexos al expediente, mismos que han podido ser consultados en su totalidad por los representantes de los padres de familia, acreditados previamente para este tema.

En el mismo sentido, durante el día uno se integró una mesa de inteligencia en la que participan representantes de todas las corporaciones de seguridad del Gobierno Federal y oficinas de inteligencia del país, asesorados por personal de agencias extranjeras que colaboraron en la recolección y explotación de información sobre el paradero de los estudiantes.

Se ha logrado acreditar la relación de María de los Ángeles Pineda Villa con el grupo delincuencia "Guerreros Unidos", obteniéndose al día de hoy una nueva orden de aprehensión que fue cumplimentada en reclusión y en contra de 53 personas más por el delito de delincuencia organizada.

Asimismo, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de 45 personas, entre las que destaca José Luis Abarca Velázquez, por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas, también dentro de una nueva consignación.

¹⁰ Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b00515.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

De igual manera se obtuvo una orden de aprehensión en contra de cinco policías municipales del municipio de Iguala por el delito de desaparición forzada, así como el auto de formal prisión para los últimos diez policías de dicho municipio consignados por esta Procuraduría hace unos días.

Al responder algunas de las dudas de los padres de familia, se expuso lo siguiente:

...

Cuarto: al día de hoy se ha detenido a 97 personas, sobre quienes se han tipificado diferentes grados de responsabilidad por diversos delitos, respecto de 221 órdenes de aprehensión, siendo que para algunas de estas personas se ha cumplimentado más de una orden.

...

Sexto: de ninguna declaración que se ha obtenido en la Procuraduría se desprende que elementos del Ejército o algún cuerpo de seguridad del Gobierno Federal, haya tenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes.

...

Ocho: se les explicaron los resultados científicos que indican la posibilidad de haber incinerado los cadáveres, tal y como lo señalan las declaraciones de los propios detenidos; se les invitó a revisar los dictámenes que obran en el expediente al cual tienen acceso sus asesores y sus representantes, mismos que han sido acreditados como coadyuvantes dentro de la investigación.

...

PREGUNTA: ¿Por qué solo se les inculpa de desaparición forzada?

TZL: Estos cinco corresponden en el tema de las primeras fosas, de los 30 cuerpos, de las cuales los jueces ya nos otorgaron para estos, a cinco policías, y también informarles que de los 30 cuerpos encontrados ahí, doce los tenemos plenamente identificados y en su momento serán entregados, la investigación sigue abierta y seguimos trabajando. Muchas gracias.

...

El 13 de enero de 2015, la Procuraduría General de la República destacó de la investigación, que se había logrado acreditar la relación de María de los Ángeles Pineda Villa con el grupo delincuenciales Guerreros Unidos, obteniéndose una nueva orden de aprehensión que fue cumplimentada en reclusión y en contra de 53 personas más por el delito de delincuencia organizada.

✓

✍



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Asimismo, que se había obtenido una orden de aprehensión en contra de 45 personas, entre las que destacaba José Luis Abarca Velázquez, por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas, también dentro de una nueva consignación.

Sin embargo, de ninguna declaración obtenida en la Procuraduría, se desprende que elementos del Ejército o algún cuerpo de seguridad del Gobierno Federal haya tenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes.

Así, se había obtenido una orden de aprehensión en contra de cinco policías municipales del Municipio de Iguala por el delito de desaparición forzada, en relación con los 30 cuerpos encontrados en las primeras fosas.

✚ Boletín 017/15, del 27 de enero de 2015.¹¹

"MENSAJE A MEDIOS SOBRE INVESTIGACIÓN POR SUCESOS EN IGUALA,
GUERRERO

JESÚS MURILLO KARAM.- Primero que nada, déjenme decirles que les agradezco mucho su presencia aquí y si no tienen ustedes inconveniente le pediría al Director en Jefe de la Agencia Criminal, el licenciado Tomás Zerón de Lucio, nos ponga al tanto de los últimos avances de la investigación para después hacer un resumen general.

TOMÁS ZERÓN DE LUCIO.- Muchas gracias, señor Procurador, muy buenas tardes. El 15 de enero de 2014, elementos de la Policía Federal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Felipe Rodríguez Salgado, conocido como "El Terco" o "El Cepillo"; miembro de la organización delictiva autodenominada Guerreros Unidos, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Felipe Rodríguez Salgado fungía como Jefe de sicarios para la organización criminal en el lugar, y realizaba, en coordinación con el Subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González y su grupo de policías, la protección del Municipio para el trasiego de droga y evitar que grupos antagónicos tuvieran presencia en él.

Después de los hechos de septiembre en Iguala, Felipe Rodríguez Salgado abandonó Guerrero dirigiéndose al norte del país, con la finalidad de cruzar a Estados Unidos para así poder evadir a la Justicia, acción que no pudo concretar y regresó al Estado de Morelos.

¹¹ Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Finalmente, el 15 de enero, la Policía Federal lo ubicó en el Municipio de Jiutepec, en donde fue detenido, identificándose en un primer momento con otro nombre.

Esta detención ha sido clave dentro de la investigación, no solamente porque todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas; sino porque él mismo confiesa su participación, corroborando los hechos narrados previamente por sus cómplices.

De acuerdo con sus propias declaraciones se hace la siguiente narración de los hechos, de aquella fatídica noche:

26 de septiembre de 2014. Felipe Rodríguez Salgado recibió una llamada en la cual le fue informado que un grupo antagónico estaba atacando Iguala, ordenándole que se trasladara al lugar conocido como "Loma del Coyote", donde le serían entregados unos "Paquetes", haciendo la precisión que dicho "sustantivo" era utilizado para denominar a los "enemigos" cuando eran capturados.

Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor

"...el Chucky me llamó por teléfono y me dijo que me iba a entregar los paquetes que llevaba detenidos y que eran del grupo contrario, Los Rojos...". Fin de la cita

Una vez en "Loma del Coyote" le fueron entregados, por parte de policías municipales de Iguala y Cocula, un grupo numeroso de estudiantes que bajaron de las patrullas y subieron a dos camionetas, mismas que fueron conducidas hasta el basurero, donde se les interrogó, ejecutó e incineró.

Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor

"...por lo que pude apreciar que probablemente eran entre 38 y 41 detenidos sin poder precisar ya que no los conté, así también me pude percatar que algunos de los detenidos venían amarrados con mecate, otros esposados y algunos venían golpeados ya ensangrentados; de policías pude apreciar que también venían entre 30 y 35 sin poder precisar ya que no los conté...". Fin de la cita

Felipe Rodríguez Salgado, narró paso a paso los acontecimientos de esa noche a partir de que le fueron entregados los estudiantes y señaló que él fue, quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias "El Pato", de terminar con la vida de todos ellos, ordenando también que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos celulares de sus víctimas.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República**
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor

"...llegando al basurero de Cocula bajamos a los estudiantes de la camioneta percatándome que unos ya estaban muertos creo que por asfixia, siendo los que iban hasta abajo y quedaban vivos aproximadamente de 15 a 18 estudiantes".

"...le encargué al Pato que se hiciera cargo de todo, de entrevistas y de darles piso, y que destruyera todo, que quemara celulares y pertenencias de los detenidos ya que esa había sido la instrucción..."

"...el Pato ya había acostado a cuatro detenidos y les disparó en la nuca, con su arma corta...". Fin de las citas.

Refirió también, haberse retirado del basurero y regresar hacia "Loma del Coyote", a casa de Gildardo López Astudillo, alias "El Gil", donde amaneció en espera de más instrucciones.

El 27 de septiembre de 2014, Felipe Rodríguez Salgado regresó al basurero.

Cuando llegó, el fuego había reducido a cenizas a las víctimas.

Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor.

"...al llegar al basurero me percaté que todavía estaba un poco prendido el fuego y muchas cenizas, en donde le pregunte al Pato y me dijo que los pusieron en una plancha de llantas, leña y fueron quemados con diésel, terminando de incinerarlos ya por la tarde...". Fin de la cita.

Felipe Rodríguez Salgado instruyó a Patricio Reyes Landa comprar bolsas de basura. Una vez recogidas las cenizas las fueron a tirar al Río San Juan.

Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor

"...me dan la orden de Gil que fuera a recoger las cenizas para tirarlas en el río, por lo que ordene al Pato que fuera a comprar unas bolsas de plástico y nos regresamos al basurero a recoger las cenizas con una pala que llevaba en la camioneta estaquitas y recogimos la ceniza y la echamos en las bolsas y entre CHEQUEL, WEREKE, WASA, PATO, PRIMO, y el de la voz, fuimos a tirar las bolsas al río San Juan..." Fin de la cita.

La confesión de Felipe Rodríguez Salgado, coincide con lo narrado por otros detenidos, como lo mostramos en la anterior conferencia, donde se dio a conocer parte de las reconstrucciones de hechos, que constituyen pruebas documentales en video, y que hoy, en un momento más, se complementarán con nuevos extractos audiovisuales.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Con estas narraciones, asentadas en las declaraciones ministeriales que fueron asistidas por sus defensores, se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región; esa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida.

Versión que se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado.

Con su confesión, que acredita su participación plena y activa en los hechos, y con la que se confirman las circunstancias de modo, tiempo y lugar, corroboradas por los dictámenes y pruebas científicas, se comprueban las versiones coincidentes de los otros involucrados.

Felipe Rodríguez Salgado ha sido consignado por los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro Agravado. La agravante consiste en el homicidio durante la privación ilegal de la libertad, y contempla una penalidad hasta de 140 años de prisión, que es la pena que se solicitará al Juez le sea impuesta a éste y a otros responsables.

Felipe Rodríguez Salgado ha sido ingresado al Penal Federal Número 1, y enfrentará su proceso por el homicidio de los estudiantes normalistas.

Para entender mejor los acontecimientos de aquella noche, es importante señalar el modo en que funcionaba ésta estructura delictiva.

En su cadena de mando, las órdenes se daban directamente de un líder a un subordinado, al que generalmente conocían sólo por el apodo, éste a su vez, las transmitía al resto de los integrantes de la célula, impidiendo así que los miembros de una parte del grupo conocieran a los de otra.

Con esto garantizaban la supervivencia de la organización, porque cuando un eslabón de la cadena se rompía, la estructura no se veía comprometida en información o en las identidades de sus integrantes.

Esto explica lo complicado que fue entender la cadena de sucesos de esa noche, ya que las células cumplían misiones concatenadas por eventos aislados, pero no se conocían entre sí; de esta manera, los diferentes grupos que habrían participado solamente tuvieron conocimiento de una parte de la trama delictiva, lo que nos confirma la existencia de un grupo organizado, donde participaban tanto miembros de la delincuencia, como servidores públicos, principalmente policías, encabezados por el Presidente Municipal de Iguala y de su esposa.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Se trató de un crimen atípico, no solamente por la magnitud y violencia a la que fueron sometidas las víctimas, sino porque el nivel de participación y los roles que jugó cada uno de los autores fueron distintos.

Esta maquinaria delictiva, los primeros participantes no conocieron nunca el destino final de las víctimas; los que los trasladaron, entregaron y ultimaron, obedecieron las órdenes transmitidas por sus superiores, por esa razón, podemos asegurar que hubo autores materiales, pero también autores intelectuales.

JESÚS MURILLO KARAM.- Esa detención y el relato que se hace de ella, sumada a la confesión, es solo una más de las muchas pruebas y evidencias que hay en las averiguaciones.

Las declaraciones vertidas por los detenidos y que fueron confirmadas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones, en números que ustedes van a escuchar en este momento, dejan clara la dimensión y la profundidad de la investigación, dándonos la posibilidad y la certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas y que son los siguientes:

TOMÁS ZERÓN DE LUCIO.- Durante la investigación, se han realizado 487 dictámenes periciales en distintas especialidades, que soportan y validan científicamente cada parte de la narrativa de los hechos, destacando los que a continuación se describen:

...
Dictámenes Fotográficos.

Los cuales, de la mano con la inspección ministerial practicada por el agente del Ministerio Público Federal, permitieron, entre otras cosas, ubicar las unidades de las policías Municipales de los ayuntamientos de Iguala y Cocula, que participaron en los hechos.

...

TOMÁS ZERÓN DE LUCIO: Respecto de la investigación, al día de hoy se cuenta ya con 99 detenidos, se han tomado 386 declaraciones y realizado 2 reconstrucciones de hechos.

...

JESÚS MURILLO KARAM: Por todo lo anterior, podemos concluir:

...

En la vigente reconstrucción de hechos se identificaron, con presencia en el basurero, por lo menos a tres de los estudiantes señalados por los detenidos como "El Cochiloco", "El Flaquito" y "El Patilludo".

Estos tres estudiantes fueron interrogados y ejecutados en el basurero por considerar ser, por parte de los que los secuestraron, miembros del grupo delincriminal antagónico, según los hoy procesados y según los relatos que ustedes ya vieron y volverán a ver en el video en la reconstrucción de los hechos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Asimismo, policías Municipales y miembros del grupo delincencial, señalaron que los jóvenes a quienes privaron de la vida, llevaban, a excepción de dos, la cabeza rapada, característica que coincide con los estudiantes de primer grado que fueron secuestrados, según los hoy procesados.

Las declaraciones de todos los policías que declararon, más de los miembros de la delincuencia organizada, en todos los casos se refieren a estudiantes.

...

El hallazgo de los restos óseos humanos en el basurero y en el río San Juan, corrobora las versiones y comprueba la presencia de un grupo numeroso de personas que fueron privadas de la vida en el lugar.

El resultado de identificación de ADN por parte de la Universidad de Innsbruck, respecto de la muestra correspondiente al Ala Mayor Izquierda Esfenoides, esta parte de la cara, que es un hueso de la parte anterior del cráneo, durante el primer análisis mediante el Método Nuclear, identificó el perfil genético de ALEXANDER MORA VENANCIO, a quien se había denunciado como parte del grupo de desaparecidos de Ayotzinapa, con lo que se comprueba a plenitud que ahí había estudiantes.

...

Éstos y muchos otros elementos aportados durante la investigación, permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes Normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden.

Ésta, es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy. Permitiendo el actuar del Ministerio Público de la Federación, que ha solicitado la imposición de las penas más altas que la legislación contempla.

Los representantes legales de los familiares acreditados para conocer los avances del caso, tienen (como lo ha tenido durante toda la investigación), el acceso directo a los 85 tomos y 13 anexos del expediente, donde se incluyen los dictámenes, declaraciones, confesiones, y todas las diligencias ministeriales mencionadas en esta presentación, y que han podido ser consultadas por ellos.

...

JESÚS MURILLO KARAM.- Como ustedes han visto, ha sido una investigación exhaustiva, profunda, seria, con muchas bases y muchos elementos que concatenados nos da la posibilidad de hacer la consignación por homicidio, como es obligación de esta institución hacerla, están puestas a disposición del juez y las instrucciones que tiene los ministerios públicos es dar seguimiento pleno, concreto, permanente y seguir obteniendo todas las posibilidades de prueba para podérselas presentar al juicio que se llevará a cabo, se dará la labor apegada a derecho, conservando siempre un respeto a los



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

derechos humanos de los detenidos y de las víctimas, apegados al debido proceso y las conclusiones se han basado en los resultados científicos que dieron, en los testimoniales que dieron y en los de razón, realidad, actividad de todos éstos.

Todas la líneas de investigación que han surgido, de manera inmediata han sido del conocimiento público por la importancia del caso, los representantes de los padres han estado en todo momento, en el momento que lo han querido, pegados al expediente, incluso en el momento que lo han solicitado, en los propios interrogatorios.

...

De lo anterior, se desprende que el sujeto obligado informó que Felipe Rodríguez Salgado, miembro de la organización delictiva Guerreros Unidos, participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; su detención era clave en la investigación pues todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas y no solamente por ello, sino porque él mismo confiesa su participación, corroborando los hechos narrados previamente por sus cómplices.

Asimismo, se informó que los desaparecidos fueron entregados por parte de policías municipales de Iguala y Cocula a Felipe Rodríguez Salgado, y éste señaló que él fue quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, de terminar con la vida de todos ellos. El 27 de septiembre, el primero de los referidos regresó al basurero e instruyó comprar bolsas de basura y una vez recogidas las cenizas las fueron a tirar al Río San Juan.

En ese sentido, se informó que Felipe Rodríguez Salgado ha sido consignado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado siendo la agravante el homicidio durante la privación ilegal de la libertad y enfrentaría su proceso por el homicidio de los estudiantes normalistas.

Así, se confirma por el Director en Jefe de la Agencia Criminal Tomás Zerón de Lucio la existencia de un grupo organizado, donde participaban tanto miembros de la delincuencia, como servidores públicos, principalmente policías, encabezados por el Presidente Municipal de Iguala y de su esposa.

De ahí que se trató de un crimen atípico, por la magnitud y violencia a la que fueron sometidas las víctimas y por el nivel de participación y los roles que jugó cada uno de los autores.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Los elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan.

La investigación da la posibilidad de hacer la consignación por homicidio, están puestas a disposición del juez y las instrucciones que tiene los ministerios públicos es dar seguimiento pleno, concreto, permanente y seguir obtenido todas las posibilidades de prueba para presentar al juicio que se llevará a cabo.

De ahí que puede concluirse que existe la probable comisión de diversos delitos por parte de servidores públicos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Quinto. En el presente considerando, se analizará si resulta fundado el agravio del particular, respecto de la clasificación de la información solicitada, manifestada por la Procuraduría General de la República, **con fundamento en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.**

En este orden de ideas, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del sujeto obligado, el agravio formulado por el recurrente, los alegatos planteados, y las demás actuaciones efectuadas en la secuela procesal.

El particular solicitó a la Procuraduría General de la República el listado y descripción de objetos, ropas, restos, casquillos y todo tipo de prueba pericial encontrados como evidencia, en relación al caso Ayotzinapa, así como fotos y copias de las actas con las constancias, en caso de tenerlas.

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, manifestó que los datos solicitados se encuentran inmersos en una averiguación previa, por lo que ostentan el carácter de reservado, motivo por el cual no era posible su entrega, bajo ninguna circunstancia; por un periodo de doce años, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, III y 15 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* y 30 de su Reglamento.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

En suma de lo anterior, el sujeto obligado señaló que la reserva también se sustenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*, el cual señala que la averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, relacionados con esta, son estrictamente reservados.

Asimismo, precisó que el precepto jurídico en cuestión establece que el servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa quedara sujeto al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal correspondiente.

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado manifestó que no resultó posible otorgar la información peticionada, toda vez que existe un impedimento legal para proporcionar datos relativos a las averiguaciones previas, en virtud de que éstas reúnen características de confidencialidad.

En este orden de ideas, también señaló que lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 14m fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, mismo que señala que las actuaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, no tienen la calidad de registros públicos, ni pueden ser considerados como fuente de acceso al público.

A mayor abundamiento, la Procuraduría General de la República refirió que este Instituto ha establecido en su "Criterio de interpretación de la fracción I del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*", que existe un principio general de derecho y de interpretación de la ley llamado "principio de reserva de ley"; mismo que establece que cuando el legislador, ya sea en su carácter de constituyente o de legislador ordinario, hace referencia a la regulación que se hace en otra "ley", se entiende que se refiere a un ordenamiento jurídico en sentido formal y material, es decir, con las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, pero además que se expidió a través del proceso legislativo establecido en la Constitución Mexicana.

En este sentido, el sujeto obligado precisó que el fundamento legal en que se apoyó esa Subprocuraduría para reservar la información de mérito, deviene de una Ley Federal, como lo es la *Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada*, instrumento jurídico que señala, en su artículo 13, que las actuaciones de una averiguación



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

previa por los delitos a que se refiere ese cuerpo normativo, sólo deberán tener acceso el inculpado y su defensor, únicamente en relación con los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares deben guardar la mayor reserva.

En adición a lo antes relatado, el sujeto obligado manifestó que otro impedimento jurídico para otorgar la información solicitada es lo dispuesto en el artículo 225, fracción XXVIII del *Código Penal Federal*, precepto jurídico que señala que son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obre en una averiguación previa o un proceso penal, y que por disposición jurídica o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales.

En suma de lo antes señalado, el sujeto obligado manifestó que en términos del artículo 31 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, no resultó procedente pronunciamiento alguno por parte del Comité de Información, ya que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no se encuentra sujeta a la autoridad del referido Comité, para efecto de declarar la reserva de la información solicitada.

No obstante lo anterior, y atendiendo al principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, el sujeto obligado señaló que la información con carácter público con la que cuenta se encuentra disponible para su consulta a través de los boletines números 180/14, 182/14, 184/14, 187/14, 191/14, 192/14, 193/14, 194/14, 195/14, 197/14, 198/14, 199/14, 201/14, 207/14, 210/14, 212/14, 214/14, 218/14, 225/14, 228/14, 240/14, 003/15, 005/15, 009/15 y 017/15, respecto de los cuales proporcionó el vínculo electrónico para su consulta.

Posteriormente, mediante su escrito de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta inicial a la solicitud de acceso que nos ocupa, y realizó las siguientes manifestaciones:

- Que en atención a la interposición del recurso de revisión, se solicitó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se pronunciara al respecto, con la finalidad de contar con mayores argumentos, derivado de los términos de la impugnación impetrada.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que derivado de lo anterior, manifestó que si bien el artículo 6, apartado A, fracción I de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* garantiza el derecho de acceso a la información por parte del Estado, y señala que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública; también lo es que dicho precepto constitucional establece la existencia de información que puede ser susceptible de **reservarse temporalmente por razones de interés público** en los términos que fijen las leyes respectivas.
- Que el artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* dispone que las averiguaciones previas se consideran información clasificada como reservada.
- Que la ley prevé como único supuesto de excepción para efectos de acceso a la información pública, la entrega de una versión pública de la resolución del no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el *Código Penal Federal*, supuesto de excepción que en el caso en concreto, no resultó aplicable.
- Que únicamente pueden tener acceso a la averiguación previa, las personas que se encuentren legitimadas para tal efecto, siendo éstas el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*.
- Que la reserva de ley establecida por el artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*, en relación a las averiguaciones previas, obedece a que dicha información protege asuntos de interés general, y su difusión afectaría a la sociedad en su conjunto, es decir, que la averiguación previa es en sí misma una razón de interés público, por lo que derivado de ello la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* en su artículo 14, fracción III le otorga el carácter de información reservada.
- Que en el caso en concreto, no resultó aplicable la excepción prevista por el artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, motivo por el que quedó subsistente la clasificación de reserva de la averiguación previa solicitada por el peticionario.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que si bien es cierto que el multicitado artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* en su último párrafo establece que no se puede invocar el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad; también lo es que, en el caso que nos ocupa, las investigaciones que realizó el Agente del Ministerio Público de la Federación **no son por delitos de lesa humanidad, sino por delitos diversos**, entre ellos, delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado, portación de arma de fuego, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este sentido, el sujeto obligado manifestó que lo anterior podía corroborarse con los boletines públicos oficiales números 210/14, 218/14, 225/14. 003/15. 005/15, 009/15 y 017/15 de esa Procuraduría.

- Que al día de la formulación de los alegatos que nos ocupan, la averiguación previa sigue abierta y se continúan realizando investigaciones, aunado a que no existe una sentencia o un pronunciamiento de autoridad competente, como el Poder Judicial de la Federación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se hubiese determinado que existieron violaciones graves a derechos humanos, en el caso que nos ocupa, por lo que debía protegerse la reserva de la información.
- Que mediante el comunicado de prensa número **CGCP/046/15**, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 02 de marzo de 2015, se manifestó que los hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos deben ser del conocimiento público y no tener carácter reservado.
- Que en dicho comunicado se manifestó que la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* establece una clara distinción entre las atribuciones que el artículo 6° concede al órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información pública, y las que el artículo 102, apartado B confiere a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En este sentido, también se precisó que la determinación de hechos violatorios a derechos humanos, así como la calificación sobre su gravedad, son cuestiones constitucionalmente reservadas para la Comisión Nacional de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Derechos Humanos, por ser la instancia que puede llevar a cabo la investigación de los mismos.

- Que a partir de lo manifestado por el Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se coligió que este Instituto carece de atribuciones para determinar si determinados hechos constituyen violaciones graves a derechos humanos, siendo una facultad exclusiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 apartado B de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.
- Que el Pleno de este Instituto emitió la resolución al recurso de revisión RDA 5151/14, en la que determinó que en el caso de la averiguación previa relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, existieron violaciones graves a derechos humanos.

En este sentido, en dicha determinación, el Pleno de este Instituto señaló que el Poder Judicial de la Federación ya había establecido que este Órgano Garante era competente para determinar la violación grave a derechos humanos, por lo que determinó procedente la entrega de la averiguación previa en cuestión.

- Que el Poder Judicial de la Federación estableció, mediante sentencia dictada con motivo del juicio de amparo interpuesto en contra de la resolución al recurso de revisión RDA 0791/12 Bis, votado por el Pleno de este Instituto, en la cual se confirmó la reserva invocada por esa Procuraduría General de la República con motivo de los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y en los que 72 migrantes perdieron la vida, que este órgano se encuentra facultado para aplicar *prima facie* la excepción a la reserva establecida en el artículo 14, último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, pero únicamente para efectos del derecho de acceso a la información.

Así las cosas, el sujeto obligado señaló que lo anterior no implicaba que este Instituto fuese competente para determinar qué hechos constituyen o no, violaciones graves a derechos humanos, lo cual es acorde con lo manifestado por el Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que con motivo de la sentencia de amparo aludida previamente, se promovió recurso de revisión de amparo, asunto que aún se encuentra en estudio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que ejerció su facultad de atracción.

En este orden de ideas la Procuraduría General de la República, señaló que este Órgano al resolver el recurso de revisión **RDA 5151/14**, tomó en consideración elementos de un asunto que, actualmente, no ha causado estado y tampoco existe un pronunciamiento firme por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Que la aplicación *prima facie* del artículo 14, último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* que puede llevar a cabo el Pleno de este Instituto, debe ser previo pronunciamiento de autoridad competente en materia de derechos humanos.
- Que en caso de proporcionarse la información requerida, se vulnerarían los derechos humanos de las víctimas (directas e indirectas) relacionadas con los hechos ocurridos en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, en claro detrimento a su derecho a la privacidad, acceso a la justicia, así como a la reparación del daño y al resguardo de su identidad.

En este orden de ideas, este Instituto acordó una comparecencia de acceso a la información clasificada, en la cual se requirió al sujeto obligado para que presentara la documental que diera contestación a la solicitud del particular.

Derivado de lo anterior, tuvo verificativo la diligencia de acceso a la información clasificada, en la que el sujeto obligado manifestó que no se exhibió la documental solicitada por el recurrente; sin embargo, solicitó el diferimiento de dicha diligencia.

Derivado de lo anterior, tuvo verificativo la diligencia de acceso a la información en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente del sujeto obligado, en la que se tuvo a la vista la averiguación previa número **PGR/SEIDO/EUIDMS/01/2015**.

Como consecuencia de lo anterior, el sujeto obligado señaló que derivado del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información del particular, y la revisión



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

minuciosa de la indagatoria de mérito, se advirtió que la expresión documental que daría atención a la petición de referencia, serían las puestas a disposición, documentales estas en las que consta la descripción de los indicios (objetos, ropas, restos y casquillos), así como las actas de cateo y las actas de inspección ministerial.

En relación a lo antes expuesto, también señaló que las referidas documentales contienen diversos datos personales considerados como confidenciales, y nombres de agentes del Ministerio Públicos Federal y peritos en diversas especialidades, quienes ostentan el carácter de personal sustantivo en materia de seguridad, por lo que a dichos datos les resulta aplicable el Criterio número 06/09, emitido por el Pleno de este Instituto.

Aunado a lo anterior, se refirió que los documentos en cuestión, ostentaban diversos datos que en su caso servirían para iniciar líneas de investigación, en atención a las actividades de prevención y persecución de los delitos a cargo de esa Procuraduría General de la República.

Así, este Instituto tuvo acceso a los documentos reseñados en el antecedente XII de la presente resolución.

Al respecto, en el artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se establece:

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

...

III. Las averiguaciones previas;

...

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

En términos de artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se considera como información reservada, las averiguaciones previas.

Por su parte, el artículo 27 del Reglamento de la Ley de la materia dispone que al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los titulares



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

de las unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en las dependencias y entidades; lo cual implica que los sujetos obligados deben llevar a cabo la debida motivación, para acreditar que la información se ubica en el supuesto jurídico invocado.

Aunado a lo anterior, el segundo párrafo del Octavo de los *Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal* (en adelante, Lineamientos Generales) establece que al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14 y 18 de la Ley de la materia, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos artículos.

Ahora bien, en caso que nos ocupa, el sujeto obligado señaló que la clasificación invocada se efectúa en relación con lo dispuesto por el artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*, cuyo contenido señala lo siguiente:

Artículo 16.- El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieran, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase.

Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme.

Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna.

En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

El Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado.

Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.

De conformidad con lo antes reproducido, la averiguación previa, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados con ésta, **son estrictamente reservados**.

En este sentido, y para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente procede la entrega de una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, una vez transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme. Es decir, aun concluidas las indagatorias, dichos documentos estarán sujetos al plazo de reserva en términos de las reglas de prescripción referidas.

Asimismo, se prevé que en ningún caso, el Ministerio Público de la Federación puede proporcionar información, una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado.

De esta manera, en caso de que el Ministerio Público de la Federación haya determinado el ejercicio de la acción penal en una averiguación previa, para efectos de acceso al expediente de consignación, es necesario acreditar la personalidad del interesado, a fin de verificar su legitimidad de acceso, donde únicamente tendrán acceso el inculcado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal.

A mayor abundamiento, en el precepto legal de referencia, se establece un supuesto de reserva específico, pues considera que salvo la resolución de no ejercicio de la acción penal, toda aquella información que esté relacionada con la averiguación previa tendrá el carácter de reservada, motivo por el cual no es susceptible de acceso.

Por su parte, la Procuraduría General de la República, también indicó desde su respuesta inicial, que el fundamento legal en que se apoyó esa Subprocuraduría



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para reservar la información, lo es el artículo 13 de la *Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada*,¹² el cual establece a la letra, lo siguiente:

Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, una vez que haya aceptado el cargo, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base en la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas.

No se concederá valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al Ministerio Público de la Federación, se le haya negado.

Del citado artículo, se desprende que las averiguaciones previas en relación con los delitos que contempla la *Ley Federal Contra Delincuencia Organizada*, únicamente deben tener acceso el indiciado y su defensor cuando éste haya aceptado el cargo, y únicamente por lo que hace a los hechos imputados en su contra, con el fin de que puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas, en relatadas condiciones, el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares deben guardar la mayor reserva respecto de ellas.

Lo anterior, se traduce en el hecho de que el artículo 13 de la *Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada* también contempla la reserva de las averiguaciones previas iniciadas en relación con los delitos que prevé la misma.

Dicho lo anterior, se concluye que en principio resultaría aplicable la causal de reserva contemplada en el artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, al tratarse de una averiguación previa que aún no ha concluido, es decir que se encuentra en trámite.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, es de vital trascendencia señalar que el precepto jurídico de referencia, tiene una excepción a la reserva de la información, prevista en su parte *infine*, la cual señala que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, por lo que resulta

¹² Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101.pdf> consultado el 08 de agosto de 2014.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

necesario analizar si en el presente caso se actualiza alguno de los referidos supuestos.

Lo anterior, derivado de que si bien el particular señaló como agravio la reserva de la información efectuada por el sujeto obligado, dicho agravio lo fundó en la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, dado que las víctimas del caso que nos ocupa sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos, precisando que tal hecho así lo había determinado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al respecto, el mismo *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* en su artículo 36, establece lo que debe entenderse como violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad:

Artículo 36. Para los efectos del artículo 14 de la Ley, se considerarán como violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad los que se establezcan como tales en los tratados ratificados por el Senado de la República o en las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones legales aplicables.

[Énfasis añadido]

En relatadas condiciones, se desprende que para los efectos de lo establecido en el artículo 14 de la Ley de la materia, se considerarán como violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad los que se establezcan como tales en los tratados ratificados por el Senado de la República o en las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones legales aplicables.

A este respecto, nos ilustra la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. ACCESO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INVESTIGUEN HECHOS QUE CONSTITUYAN GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA HUMANIDAD

En materia de derecho a la información pública, la regla general en un Estado democrático de derecho debe ser el acceso y máxima publicidad de la información. Sin embargo, la regla general presenta algunas excepciones, las cuales, por mandato constitucional, deben estar previstas en leyes en sentido formal y material. Una de estas excepciones es el caso de las averiguaciones previas, cuyo contenido debe



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

considerarse como estrictamente reservado, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de los artículos 13, fracción V, y 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ahora bien, esta limitante tampoco puede considerarse como absoluta y presenta una excepción -de modo que estamos ante una excepción a la excepción- consistente en que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **no puede alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.** Las averiguaciones previas se mantienen reservadas en atención a que la difusión de la información contenida en ellas podría afectar gravemente la persecución de delitos y, con ello, al sistema de impartición de justicia. **A pesar de lo anterior, la ley previó como excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.** Estos casos de excepción son las investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recuerda que el Tribunal Pleno reconoció en la tesis jurisprudencial P./J. 54/2008, el doble carácter del derecho de acceso a la información, como un derecho en sí mismo, pero también como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En este sentido, el Tribunal Pleno destacó que el derecho de acceso a la información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. En virtud de lo anterior, **cobra una especial relevancia la necesidad de permitir el acceso a la información que conste en averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad,** pues estos supuestos no sólo afectan a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican.¹³

Como se observa, la tesis prevé que como excepción a la reserva de las averiguaciones previas, aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva, se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.

¹³ [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 652.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Como consecuencia de todo lo antes expuesto, resulta indispensable analizar los alcances de la competencia que tiene este Instituto, para interpretar para efectos del derecho de acceso a la información, la actualización de las excepciones previstas en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, las cuales corresponden a violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Al respecto, debe tenerse en cuenta la sentencia del amparo **1371/2013**, dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el 11 de abril de 2014, el cual fue promovido en contra de la resolución del recurso de revisión **RDA 2486/14** y su acumulado **RDA 4291/13**, emitida por este Instituto.

Al resolver dicho medio de defensa, se determinaron, entre otras cuestiones, las siguientes:

7.1. El IFAI sí tiene facultades para pronunciarse *prima facie* sobre violaciones graves de derechos humanos respecto de los hechos consignados en averiguaciones previas.

Contrario a lo asentado por el IFAI, dicho Instituto sí cuenta con facultades para pronunciarse *prima facie* sobre las violaciones graves de derechos humanos únicamente para efectos de asumir y ejercer sus propias competencias en materia de acceso a la información de las averiguaciones previas.

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 168/2011 expresó lo siguiente:

"Al respecto, esta Sala observa que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad carecen del carácter de información reservada. Esto no quiere decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública cuente con facultades para determinar si se han actualizado las hipótesis antes descritas, ni quiénes serían los responsables.

En primer término, los criterios bajo los cuales se consideran ciertos hechos como graves violaciones a derechos humanos han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que los delitos de lesa humanidad se encuentran tipificados en el Código Penal Federal y en el Estatuto de Roma. Así, la determinación correspondiente la harán las propias autoridades investigadoras, que en este caso fue la Procuraduría General de la República, de modo que cualquier eventual pronunciamiento por parte del



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Instituto tendrá naturaleza prima facie y se circunscribirá en las propias conclusiones de la autoridad investigadora, según consten en el expediente de averiguación previa. (...) Adicionalmente, la calificación de los hechos dentro de alguna de las categorías en comento podrá realizarse por la autoridad judicial competente.

Como se advierte de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia asentó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad carecen del carácter de información reservada.

Precisó que esto no quiere decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública cuente con facultades para determinar si se han actualizado las hipótesis antes descritas, ni quiénes serían los responsables; sin embargo, apuntó que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública sí tiene competencia para pronunciarse *prima facie* sobre el hecho consistente en si una averiguación previa versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos, aunque exclusivamente para efectos de brindar o no acceso a la información solicitada.

De conformidad con la parte citada de la sentencia emitida para resolver el amparo número **1371/2013**, se desprende que la autoridad jurisdiccional determinó que este Instituto sí tiene facultades para pronunciarse *prima facie* sobre violaciones graves de derechos humanos, únicamente para el efecto de asumir y ejercer la competencia en materia de acceso a la información de las averiguaciones previas.

Asimismo, se retomó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número **168/2011**, del cual se estableció que con base en lo dispuesto en la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, consistente en que las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad no tienen el carácter de información reservada; luego entonces efectivamente se colige que este Instituto no cuenta con facultades para determinar si se han actualizado dichas hipótesis, ni determinar sobre quiénes serían los responsables.

Sin embargo, también se determinó que este Instituto sí cuenta con competencia para pronunciarse *prima facie* sobre el hecho consistente en si una averiguación previa versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos, pero exclusivamente para efectos de brindar o no acceso a la información solicitada.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Lo anterior se traduce en el hecho de que, de conformidad con los razonamientos vertidos por la autoridad jurisdiccional en la resolución de amparo número 1371/2013, si bien es cierto que este órgano garante no cuenta con la competencia para determinar quiénes son los responsables y si éstos cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves a derechos humanos; también lo es que si puede pronunciarse prima facie sobre si una averiguación previa versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad; cuyos efectos jurídicos sólo tienen como consecuencia que se brinde o no el acceso a la información de las mismas.

En ese mismo sentido, en la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el 13 de marzo de 2014, en el juicio de amparo 1189/2013-VIII, promovido en contra de la resolución emitida por este Instituto al recurso de revisión RDA 0791/12 BIS, al cual hizo referencia el sujeto obligado en vía de alegatos, se resolvió lo siguiente:

En ese contexto, de los razonamientos anteriores, se concluye que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en términos del artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, si cuenta con facultades para interpretar si en el caso específico, opera la excepción de reserva prevista en el artículo 14, último párrafo, respecto de la averiguación previa número PGRITAMPS/MAT-III-2194/2010, relativa al caso de la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas en el año dos mil diez.

Asimismo, para determinar si el caso en concreto se ubica en dicha excepción de reserva, resulta incorrecto que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, respalde la reserva formulada por la Procuraduría General de la República, en términos de lo previsto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que como se expuso en el presente fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya declaró que la restricción que prevé dicho precepto para el caso de las averiguaciones previas, es desproporcional y transgrede el derecho humano de acceso a la información.

Finalmente, contrario a lo manifestado por el Instituto citado del contenido de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se advierte que alguno de sus preceptos, prevea que debe existir un pronunciamiento sobre el caso en específico para que entonces el Instituto pueda determinar la procedencia de la excepción de reserva tratándose de averiguaciones previas, en las que los solicitantes consideren que la información se trata de violaciones graves a derechos humanos o de lesa humanidad, no obstante ello, existen diversos ordenamientos nacionales e internacionales e interpretaciones que prevén los lineamientos a seguir para llegar a esa determinación, por lo que como intérprete de la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, está facultada para determinar si el caso concreto, esto es la masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en el año dos mil diez, se ubica o no, en la excepción de reserva, siguiendo los lineamientos básicamente, previstos en los artículos 149 y 149 bis del Código Penal Federal, que tipifica como delitos contra la humanidad y el genocidio; 7 del estatuto de Roma, que define qué se considera como delitos de lesa humanidad; así como los lineamientos previstos en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1ª. XI/2012 (10a), de rubro **VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LAS INVESTIGA**, que establece criterios cuantitativos (número, intensidad, amplitud, generalidad, frecuencia o su prolongación en el tiempo), y cualitativos (multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo, especial, magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y una participación importante del estado, a ser los actos cometidos por agentes estatales o con aquiescencia del estado) para determinar que una violación a derechos humanos es "grave", y subsumir el caso en concreto, esto es la masacre de San Fernando Tamaulipas ocurrida en el año dos mil diez a los preceptos y criterios descritos.

...

De lo anterior, se desprende que la autoridad jurisdiccional concluyó que este Instituto sí tiene facultades para interpretar si en el caso en concreto operan o no los supuestos previstos en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Asimismo, señaló que no es necesario que otra autoridad se pronuncie sobre si hubo o no violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para que este Instituto pueda determinar, para efectos del derecho de acceso a la información, si se actualiza la excepción a la reserva prevista en el artículo 14, último párrafo de la Ley de la materia.

Finalmente, se mencionó que, para dichos efectos, debe tomar en consideración los artículos 149 y 149 bis del *Código Penal Federal*; 7 del estatuto de Roma; así como, los lineamientos previstos en la jurisprudencia de rubro "VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LAS INVESTIGA", la cual contiene los criterios cuantitativos y cualitativos a seguir.

Es decir, con la sentencia recaída al juicio de amparo número 1189/2013-VIII, se contempla nuevamente y con ello se reafirma, que este Instituto tiene competencia



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

para determinar si se ubica o no en las excepciones de la reserva de la averiguación previa que nos ocupa, por ser el intérprete de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, con lo que únicamente ejerce las facultades con las que cuenta.

En ese orden de ideas, conviene referir que en términos de los artículos 6 y 37, fracción I de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, corresponde a este Instituto interpretar el mencionado ordenamiento legal.

De lo antes expuesto, se advierte que las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado, relacionadas con el juicio de amparo promovido en contra de la resolución al recurso de revisión 0791/12 Bis, y consistentes en que los pronunciamientos de este Instituto *prima facie* en materia de actos que se consideren violaciones graves a derechos humanos, deben estar antecedidos de un pronunciamiento de autoridad competente en materia de derechos humanos, resultan contrarios a las consideraciones de hecho y de derecho vertidas por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al resolver el citado juicio federal.

A mayor abundamiento, con motivo de las reformas constitucionales publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de junio de 2011, se conforma un bloque constitucional en materia de derechos humanos, pues los órganos de gobierno del Estado mexicano quedan obligados a respetar todo derecho humano previsto tanto en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* como en todo Tratado Internacional del que México sea parte.

En tal sentido del artículo 1º de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, se desprende que en aras de brindar irrestricto respeto a los derechos humanos, todo órgano con facultades decisorias o de *imperium*, debiendo respetar estas, el **principio pro persona**; lo cual implica que la aplicación e interpretación de la norma siempre deberá ser tal que se favorezca en la mayor medida el otorgamiento y reconocimiento de los derechos humanos.

Para tales efectos, se cuenta con la obligación de llevar a cabo un "control de convencionalidad"¹⁴, que es precisamente armonizar el orden jurídico de tal suerte

¹⁴ Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano y otros*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124; *Caso Trabajadoras Casadas del Congreso (Aguado Alfaro y otros)*. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128; *Caso La*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

que su aplicación no vulnere ni restrinja en lo más mínimo cualquier derecho humano previsto en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la jurisprudencia convencional interamericana.

Sobre este punto, cabe señalar que en el expediente varios 912/2010, del 14 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el "Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos" en relación con lo establecido en el artículo primero constitucional, respecto a la obligación de todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se declaró que si bien es cierto que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben aplicar las normas correspondientes a derechos humanos haciendo la interpretación más favorable a la persona con el fin de lograr una protección más amplia, no se tiene la posibilidad de la inaplicación o declaración de la incompatibilidad de las mismas por todas las autoridades.

En ese sentido, el modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad para nuestro país, dependerá de la autoridad encargada de aplicar normas que contengan derechos humanos. Por lo que, este Instituto se encuentra en el supuesto de tipo de control denominado "interpretación más favorable", al no ser un órgano jurisdiccional.

Cantuta. Sentencia de 29 de septiembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 167; *Caso Boyce y otros*. Sentencia de 20 de noviembre de 2006. Serie C No. 169, párr. 78; *Caso Heliodoro Portugal*. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 154, párr. 179; *Caso Radilla Pacheco*. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339; *Caso Manuel Cepeda Vargas*. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208; *Caso Comunidad Indígena XákmokKásek*. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311; *Caso Rosendo Cantú y otra*. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219; *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña*. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 202; *Caso Vélez Loor*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 287; *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia)*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106; *Caso Cabrera García y Montiel Flores*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párrs. 223 a 235; *Caso Gelman*. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 193; *Caso Fontevecchia y D'Amico*. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, párr. 93; Véase también el Voto Razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en la sentencia del *Caso Cabrera García y Montiel Flores*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220 y especialmente el engrose del asunto *Radilla Pacheco*, Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Por lo tanto, este Instituto, al hacer esta Interpretación no invade competencias de otras autoridades; por el contrario, ejerce las facultades y atribuciones con las que cuenta.

Ahora bien, atendiendo a los criterios que sobre el significado de lo que es una violación grave de derechos humanos o un delito de lesa humanidad ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Penal Internacional, se realiza un pronunciamiento *prima facie* para poder establecer, si en el caso concreto, se produce la actualización de los supuestos contemplados en el artículo 14, último párrafo de la Ley de la materia, para efecto de otorgar o no el acceso a la información de la averiguación previa solicitada.

En relatadas condiciones, si bien este Instituto no puede determinar quiénes son los responsables de un ilícito y si se configuró o no un tipo penal, sí puede analizar si se actualiza la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, para efectos únicamente de establecer si debe prevalecer el derecho de acceso a la información de la sociedad.

Determinada la competencia de este Instituto para pronunciarse *prima facie* sobre violaciones graves de derechos humanos, para efectos de brindar o no acceso a la información solicitada, se procederá a analizar si en el caso concreto se actualiza la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, relativa a **violaciones graves a derechos fundamentales**.

En principio, es importante mencionar que hablar sobre violaciones a los derechos humanos es distinto que hablar sobre graves violaciones a los derechos humanos.

Sobre este punto, tomando en cuenta el artículo primero constitucional puede advertirse que una violación a derechos humanos implica la vulneración a algún derecho reconocido en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* o bien en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Mientras que uno de los elementos que caracteriza como "grave" a una violación es, el carácter inderogable de los derechos humanos afectados y/o la violación de las normas imperativas del derecho internacional.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos caracterizó como graves violaciones de derechos humanos aquellos actos como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.¹⁵

Así, en tanto afectan derechos humanos inderogables y/o prohibiciones de *ius cogens*, (normas imperativas internacionales) estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, en consecuencia, deben ser sancionados penalmente.

Este tipo de violaciones van en contra de la dignidad de las personas, por lo que la realización, aquiescencia u omisión en la prevención o sanción de violaciones graves de derechos humanos son incompatibles con la idea misma de un Estado democrático de derecho, con sus principios rectores, con su configuración y operación.

Estas graves violaciones a los derechos humanos, entre otros actos, constituyen crímenes bajo el derecho internacional, por lo que el Estado tiene la obligación internacional de juzgar y castigar a los responsables de éstos, sin la posibilidad de alegar ya sea la obediencia debida o el cumplimiento de órdenes superiores para exonerarse de responsabilidad penal.

Prosiguiendo con el estudio que nos ocupa, resulta importante retomar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado sobre el caso en particular:

VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LAS INVESTIGA. De conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. **A fin de que el intérprete determine si un caso concreto se ubica en el supuesto de excepción relativo a las violaciones graves a derechos humanos y deba dar acceso a la averiguación previa correspondiente, es necesario que atienda a los lineamientos sentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Siguiendo los lineamientos**

¹⁵ Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Barrios Altos vs Perú*, sentencia del 14 de marzo de 2001, párr. 41.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

establecidos por este alto tribunal, para determinar que una violación a derechos humanos es "grave" se requiere comprobar la trascendencia social de las violaciones, lo cual se podrá determinar a través de criterios cuantitativos o cualitativos. **El criterio cuantitativo determina la gravedad de las violaciones demostrando que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables**, tales como el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos. Es lógico que el criterio anterior no haya podido aplicarse a todos los casos, razón por la cual esta Suprema Corte también ha entendido que en algunos supuestos la trascendencia social de las violaciones se puede demostrar mediante un **criterio cualitativo, determinando si éstas presentan alguna característica o cualidad que les dé una dimensión específica**. En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese tribunal ha determinado que la "gravedad" radica, esencialmente, en que se presenten las siguientes características: multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y una participación importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado." ¹⁶

De conformidad con lo anterior, para efecto de determinar si se actualiza el supuesto del último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, se requiere comprobar la **trascendencia social** de las violaciones, lo cual se podrá determinar a través de criterios cuantitativos o cualitativos.

El criterio cuantitativo determina la gravedad de las violaciones demostrando que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos.

El criterio cualitativo determina si estas violaciones presentan alguna característica o cualidad que les dé una dimensión específica. Así, la "gravedad", de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radica, esencialmente, en que se actualicen las siguientes características:

- Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo;

¹⁶ Tesis Aislada(Constitucional), 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 667



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y,
- Una participación importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado.

En ese sentido, para poder determinar si en el presente caso se actualizan los referidos criterios, es indispensable traer a colación la información pública emitida por la propia Procuraduría General de la República sobre los hechos acaecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, y los avances que se han dado sobre la investigación, de la cual se desprende que los delitos por lo que se han consignado a quienes participaron en dicho sucesos, son **secuestro, delincuencia organizada y homicidio**.

Lo anterior, derivado de los boletines de prensa de la Procuraduría General de la República, tal es el caso del número **198/14**, donde se señaló que se tenía plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada, mientras que en el boletín número **210 /14** se informó que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue puesto a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimiento a una orden de aprehensión.

De igual forma, en el boletín **003/15**, se manifestó que se puso a disposición del Ministerio Público de la Federación a diversas personas quienes eran elementos de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, ejerciendo posteriormente acción penal contra las mismas por los referidos delitos.

Asimismo, en el boletín **005/15**, se informó que de acuerdo con la investigación se tenía la posibilidad de hacer la consignación por homicidio.

En relación con los delitos que se perseguían, se aclaró que en ese momento correspondían a **delincuencia organizada, secuestro y lo que resultara**, ya que en un inicio se había mencionado además **desaparición forzada**, en virtud de ser la información que se tenía de acuerdo al boletín **198/14**. Aunado a ello, se señaló que en la averiguación previa que remitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Guerrero, se inició por el delito de desaparición forzada, homicidio y lesiones pero actualmente sólo se persiguen los delitos de secuestro y delincuencia organizada, pues del delito de desaparición forzada se resolvió en su momento por el Juez de Distrito en materia de Procesos Penales Federal, en Matamoros Tamaulipas que no se colmaban los elementos del tipo penal y que carecía de competencia en virtud de que a su juicio la consignación se había efectuado por un delito del fuero común.

En adición a todo lo antes expuesto, de los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de acuerdo con la información dada a conocer en un principio por la Procuraduría General de la República, se advierte que se privó de la vida a una persona¹⁷, mientras que 43 personas más se encontraban desaparecidas.

Posteriormente, de los avances al caso, se pudo advertir que en los acontecimientos de Iguala del 26 de septiembre de 2014, también se produjo el homicidio de seis personas, pues de acuerdo con el boletín 212/14, se precisó que se tenían detenidos a quienes privaron de la vida a seis personas en Iguala en dicha fecha, lo cual se reafirma en el boletín 240/14.

En ese sentido, de conformidad con lo expuesto en cuanto al **criterio cuantitativo** que determina la gravedad de las violaciones demostrando que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como el número, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos, puede advertirse que se colman dichas características, como se analiza a continuación.

Así, por lo que hace al **criterio cuantitativo**, puede concluirse que derivado de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y de acuerdo con la información pública, se privó de la vida a seis personas y desaparecieron 43 estudiantes a los cuales actualmente se les ha considerado como probablemente fallecidos, de acuerdo con los resultados de la indagatoria que lleva la Procuraduría General de la República,¹⁸ lo cual implica un número considerable de víctimas.

¹⁷ Boletín 198/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm>

¹⁸ Boletines 212/14, 240/14, 017/15. Disponible en:
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21214.shtm>,
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Dic/b24014.shtm>
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm> y



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

No obstante lo anterior, debe tomarse en cuenta la reiteración de las **conductas ilícitas**, puesto que implicaron en principio la privación ilegal de la libertad de diversas personas presuntamente por servidores públicos, mismas que de acuerdo a las investigaciones hasta la fecha practicadas, y conforme a la hipótesis que hizo pública el Procurador General de la República, probablemente fueron privadas de la vida.¹⁹

En el mismo sentido, se advierte una **prolongación** en el tiempo de las conductas ilícitas, y la intensidad de las mismas, puesto que se trata de una sucesión de actos que presuntamente iniciaron con la privación ilegal de la libertad y que culminaron con el homicidio de diversas personas, por lo que se vieron trastocados gravemente el derecho a la libertad y a la vida de las personas.

En ese orden, es posible advertir que se actualiza el **criterio cuantitativo** para determinar la gravedad de las violaciones.

Por cuanto hace al **criterio cualitativo**, y de acuerdo con los elementos del presente caso, es posible observar que las conductas cometidas en contra de los estudiantes encuadran presuntamente en diversos tipos penales, tal como secuestro y delincuencia organizada, por lo que constituyen múltiples delitos que se prolongaron en el tiempo desde el 26 de septiembre de 2014 y que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, culminaron presuntamente con el homicidio de las mismas.

Es decir, los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 implicaron una **variedad de violaciones**, al haberse configurado diversos ilícitos, tal como lo ha hecho del conocimiento la Procuraduría General de la República a través de los avances presentados públicamente sobre la investigación, al señalar que policías municipales de Iguala y Cocula presuntamente incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada;²⁰asimismo, que el ex presidente municipal de Iguala fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado²¹.

¹⁹ Boletín 017/15. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>

²⁰ Boletín 198/14 y 003/15. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm> y <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b00315.shtm>

²¹ Boletín 210 /14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Nov/b210%2014.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Aunado a lo anterior, es posible advertir que las violaciones cometidas resultan de **gran magnitud**, puesto que las conductas realizadas trajeron consigo la afectación reiterada a derechos de un número considerable de víctimas, trascendiendo de igual forma a los familiares de los desaparecidos, en virtud de no poder conocer su paradero y a la sociedad en su conjunto precisamente por la gravedad de las mismas, lo cual se robustece con lo manifestado por la Procuraduría General de la República en el boletín 017/15 al señalar que se trató de un crimen atípico, **no sólo por la magnitud y violencia a la que habían sido sometidas las víctimas**, sino además por el nivel de participación y los roles que jugaron cada uno de los presuntos autores.²²

Por otra parte, de la información pública emitida por la Procuraduría General de la República, se puede **constatar una participación importante de agentes del Estado** (servidores públicos municipales y estatales) en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

En este punto, es pertinente tener en cuenta las circunstancias que ocurrían en Guerrero, y que se desprenden de la información oficial dada a conocer por la Procuraduría General de la República, al manifestar que el líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula.²³ De igual forma que **se confirmaba la existencia de un grupo organizado donde participaban tanto miembros de la delincuencia como servidores públicos**, principalmente policías encabezados por el entonces Presidente Municipal de Iguala y su esposa la entonces Presidenta del centro para el Desarrollo Integral de la Familia.²⁴

Es decir, de acuerdo con el contexto que se desarrollaba, en Guerrero existe la presunción de que agentes estatales participan junto con organizaciones de la delincuencia organizada en dicha entidad federativa, lo cual refuerza la participación de agentes estatales en los hechos ocurridos en Iguala Guerrero.

Aunado a lo anterior, de los avances de la investigación, se desprende la detención de **catorce personas que se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Cocula, Guerrero, y un empleado administrativo de dicha policía**

²² Boletín 017/15. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>

²³ Boletín 212/14. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21214.shtm>

²⁴ Boletín 017/15. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

municipal, los cuales están presuntamente involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes.²⁵

Asimismo, del boletín oficial número 198/14, se desprende que **un policía municipal privó de la vida con arma de fuego a uno de los estudiantes en el momento en que ocurría el incidente.**

Por otra parte, también se ha informado la **detención de veinticuatro policías municipales, siendo diez de ellos de Iguala y catorce de Cocula**²⁶ y, posteriormente, se indicó que se tenían detenidas y consignadas a cincuenta y dos personas, entre las cuales, se encontraban **policías locales y funcionarios municipales.**²⁷ Del mismo modo, se dio a conocer que el ex Presidente Municipal de Iguala había quedado a disposición de la autoridad jurisdiccional, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado.²⁸

Aunado a lo anterior, se ha manifestado por parte del sujeto obligado la **detención del ex Subdirector de la policía de Cocula, Guerrero, integrante de la organización criminal autodeterminada Guerreros Unidos**, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro en agravio de los 43 normalistas.²⁹

Así también, se informó más tarde que entre las personas detenidas, estaban quienes detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron a la organización criminal autodeterminada Guerreros Unidos a un grupo de personas, encontrándose entre ellos a **cuarenta y cuatro elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula y a dieciséis más que se tenían identificados y se les estaba buscando.**³⁰

De acuerdo con lo antes dicho, se puede concluir que en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, se tuvo una participación importante del Estado, **puesto que diversos actos fueron presuntamente cometidos por agentes estatales**, lo cual se reafirma, de conformidad con las manifestaciones realizadas por personal de la

²⁵ Boletín 191/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19114.shtm>

²⁶ Boletín 193/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19314.shtm>

²⁷ Boletín 198/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm>

²⁸ Boletín 210/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Nov/b210%2014.shtm>

²⁹ Boletín 225/14. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b22514.shtm>

³⁰ Boletín 240/14. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Dic/b24014.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Procuraduría General de la República en las diligencias practicadas, al señalar que se consignaron a policías municipales de Iguala y Cocula, al ex Presidente Municipal de Iguala y su esposa la entonces Presidenta del Centro para Desarrollo Integral de la Familia.

Ahora bien, en concordancia con los elementos que se tienen del presente caso, es posible colegir que los actos que se cometieron atentaron contra la libertad, la integridad física, la seguridad y la vida de las víctimas.

En ese orden de ideas, de acuerdo con los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, relativos a las garantías de seguridad jurídica y de legalidad, se establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Asimismo, en los artículos 1, 4.1, 5.1 y 5.2, 7.1 y 7.2 y 8.1 de la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*,³¹ se establece el derecho de toda persona a que le sea respetada su vida, su integridad física, psíquica y moral, libertad y seguridad personal, al acceso a la justicia, así como que nadie debe ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

De igual forma, en los artículos 6 y 9 del *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*,³² se establecen los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personales, así como el derecho efectivo a obtener reparación en caso de que ilegalmente se haya sido detenido o preso.

Por lo tanto, existen elementos que señalan que los actos ilícitos cometidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero violan derechos reconocidos en nuestra Constitución y por la normatividad internacional referida que forma parte del orden jurídico mexicano, como el derecho a la vida, a la

³¹

Disponible

en:

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

[32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm)

³² Disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

integridad física, psíquica y moral, libertad y seguridad personal, y al acceso a la justicia.

Por lo tanto, tal y como se ha como se ha expuesto, se comprueba la trascendencia social de las violaciones graves cometidas en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación³³, al actualizarse no sólo el criterio cuantitativo sino además el cualitativo, que para efecto de violaciones graves a derechos humanos, señaló nuestro Máximo Tribunal.

Sobre este aspecto, es importante traer a colación los diversos comunicados de prensa que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con los cuales se refuerza la comisión de violaciones graves a derechos humanos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

En el comunicado número **CGCP/354/14**,³⁴ del 18 de diciembre de 2014, se hace alusión a la creación de una Oficina Especial para el Caso Iguala nombrando al titular de la misma, quien se encargaría de **“atender las violaciones graves a derechos humanos por los lamentables acontecimientos ocurridos en esa ciudad los días 26 y 27 de septiembre de 2014.**

Por su parte, en el comunicado **CGCP/356/14**,³⁵ del 22 de diciembre de 2014, se señala que se acordó **continuar el expediente que en su momento se inició por los referidos acontecimientos como una investigación de violaciones graves a derechos humanos, bajo el número de expediente CNDH/1/2014/6432/Q/VG.**

En ese mismo tenor, el comunicado **CGCP/356/14/018/15**,³⁶ de fecha 27 de enero de 2015, refiere que el organismo instruyó a que se continuara con el análisis de las actuaciones de la Procuraduría General de la República, a fin de no dejar cabo suelto, y **determinar las violaciones graves a los derechos humanos, el cual se reproduce a continuación:**

³³ Tesis Aislada (Constitucional), 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 667

³⁴ Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_2014_354.pdf

³⁵ Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_2014_356_corr.pdf

³⁶ Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2015/COM_2015_018.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

**"INSTRUYE EL OMBUDSMAN NACIONAL A CONTINUAR EL ANÁLISIS
EXHAUSTIVO DE ACTUACIONES DE LA PGR PARA DETERMINAR VIOLACIONES
GRAVES A DERECHOS HUMANOS EN EL CASO IGUALA**

En relación con el informe dado a conocer hoy por la Procuraduría General de la República, en torno a las investigaciones sobre el caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puntualiza lo siguiente:

- 1.- El Ombudsman nacional instruyó a la Oficina Especial de la CNDH para el caso Iguala que continúe el análisis exhaustivo de las actuaciones de la PGR, a fin de no dejar un solo cabo suelto, **para determinar las violaciones graves a los derechos humanos, derivados de los acontecimientos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre pasados.**
- 2.- La CNDH ha solicitado la información respectiva a las diferentes autoridades, con el fin de **determinar cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que se cometieron antes, durante y con posterioridad a los hechos, particularmente las relacionadas con las diligencias ministeriales practicadas.**
- 3.- Esta Comisión Nacional entiende el dolor de las familias, su desesperación por conocer el paradero de los jóvenes y su demanda de justicia, por lo que mantendrá abierto el expediente de queja respectivo, agotará todas las "focalizaciones de investigación" y continuará con su acompañamiento a los familiares de las víctimas.
- 4.- La CNDH subraya que no anticipará conclusiones sobre las violaciones a los derechos humanos y, al término de su investigación, hará el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. Al mismo tiempo, reitera su absoluto respeto a la libertad de expresión y considera que no debe estigmatizarse a los jóvenes normalistas, a sus familias ni a sus representantes."

Al respecto, debe señalarse que si bien de acuerdo con lo manifestado por el sujeto obligado en vía de alegatos, en el sentido de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no había emitido pronunciamiento alguno de la existencia de violaciones graves a derechos humanos en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero; debe tenerse presente que actualmente dicho organismo ha referido que se están determinando las probables violaciones graves a los derechos humanos en los sucesos y que el expediente abierto para tales efectos se está llevando como **una investigación de violaciones graves a derechos humanos.**

Por otro lado, es imprescindible señalar que si bien de acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades que llevan a cabo las investigaciones de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, no se ha



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

imputado el delito de desaparición forzada a los probables responsables; existen otras autoridades nacionales e internacionales que, dada la trascendencia y gravedad de los hechos, se han pronunciado considerando que en los acontecimientos se configuró dicho ilícito, lo cual permite vislumbrar que dichos sucesos no sólo afectaron a las víctimas y sus familias sino también a la sociedad en general.

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del comunicado de prensa **CGCP/340/2014**, del 05 de diciembre de 2014, destacó la importancia de que la autoridad esclareciera los hechos de **desaparición forzada de 43 estudiantes** en Iguala con el fin de conocer la verdad de éstos, impartir justicia y castigar a los responsables.

En ese mismo sentido, en el comunicado de prensa **CGCP/348/2014**, del 15 de diciembre de 2014, al exhortarse al Ejecutivo Federal a que aceptara la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, se señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tener como objetivo principal la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en México, reconocía, entre otros, los vergonzosos hechos ocurridos con la **desaparición forzada** de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la **sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional**, con el fin de resolver este oprobioso caso, así como otras **desapariciones forzadas** presentadas en diversas entidades federativas, recordando la obligación que tiene el Estado Mexicano de dar cumplimiento, cabal e integral, a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su comunicado de prensa número **133/14**,³⁷ del 12 de noviembre de 2014, informó entre otras cosas, que el Estado Mexicano y los representantes de los estudiantes **víctimas de desaparición forzada** y sus familias en el mes de octubre habían planteado a dicho organismo una solicitud de asistencia técnica para la búsqueda, la investigación, y el apoyo a las familias, por lo que, acordó supervisar la creación de un Grupo Interdisciplinario de Asistencia Técnica, a fin de proveer asistencia y verificación técnica de las acciones iniciadas por México tras la desaparición de los estudiantes, siendo que dicho apoyo técnico incluirá medidas destinadas a resolver los problemas

³⁷ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/133.asp>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala.

En ese mismo orden, mediante el boletín de prensa, de fecha 10 de octubre de 2014, emitido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas afirmó que la investigación del asesinato y la **desaparición forzada** de estudiantes en Guerrero representa una prueba crucial para la voluntad y capacidad del Estado mexicano de lidiar con graves violaciones a los derechos humanos.³⁸

Por otra parte, es importante señalar que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en sus observaciones finales del informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, indicó que la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de dicha Convención.

Asimismo, en relación con los hechos que nos ocupan, se manifestó que "el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a **desaparición forzada** en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte, en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas".³⁹

En ese sentido, y sobre dichas observaciones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del comunicado de prensa **CGCP/032/15**, de fecha 13 de febrero de 2015, coincidió en que el caso de los 43 estudiantes de Iguala sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 ilustra, desde la perspectiva del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, los desafíos que enfrenta el Estado Mexicano en la prevención, investigación y sanción de este delito, así como la búsqueda de las personas desaparecidas.⁴⁰

³⁸

Disponible

en:

<http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15155&LangID=S>

³⁹

Disponible

en:

<http://www.hchr.org.mx/images/CED/Observaciones%20Finales%20Comite%20Desaparicion%20Forzada%20MX2015.pdf>

⁴⁰ Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2015/COM_2015_032.PDF



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

A mayor abundamiento, puede advertirse que derivado de la trascendencia social del caso, por las conductas cometidas en contra de las víctimas de los hechos acaecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tanto en el ámbito nacional por autoridades diversas a la Procuraduría General de la República como en el internacional por diferentes instancias, se han pronunciado sobre la necesidad de que este caso sea debidamente investigado, e incluso dichas autoridades han considerado que se **podría configurar el delito de desaparición forzada**.

Con el fin de tener mayor claridad sobre el tipo penal de **desaparición forzada**, debe señalarse lo que al efecto establece el artículo 215-A del *Código Penal Federal*:

Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Dicho precepto jurídico señala claramente que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Asimismo, en el artículo 2 de la *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas*, se establece que para los efectos de dicho instrumento se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso *Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos*, el cual si bien trata sobre desaparición forzada, señaló que el acto de desaparición y su ejecución se inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida y los hechos no se hayan esclarecido.⁴¹

⁴¹ Caso *Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos*, párr. 23. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Por lo que en la especie, a pesar de que por las autoridades investigadoras de los hechos, a la fecha no se ha imputado el delito desaparición forzada; lo cierto es que dada la trascendencia y la gravedad de los mismos, otras autoridades nacionales e internacionales han considerado que podría actualizarse dicho delito, lo cual robustece la trascendencia social de las violaciones cometidas en los sucesos acaecidos en Iguala Guerrero que impactan a la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, dada la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, se han ejecutado distintas acciones por diversas autoridades mexicanas, tal como la instalación de una Comisión Especial en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", misma que quedó formalmente instalada el 8 de octubre de 2014.⁴²

Como consecuencia de lo anterior, la citada Comisión Especial presentó un resumen de las actividades que ha llevado a cabo, pudiéndose observar, entre ellas, diversas reuniones con autoridades del Estado de Guerrero, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, entre otras, asimismo solicitó información relacionada con los hechos, y realizó diversas acciones para tener el acercamiento con las víctimas y sus representantes.

Por su parte, el Senado de la República instauró el Grupo de Trabajo Plural para el seguimiento de las investigaciones de los hechos acontecidos en el municipio de Iguala, Guerrero, con los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" el cual quedó instalado el 14 de octubre de 2014.⁴³

Al respecto, de los informes que ha emitido el Senado de la República derivado del seguimiento a la investigación sobre el caso en cuestión, pueden desprenderse las acciones que se han tomado, tal como reuniones realizadas con el Procurador General de la República.

⁴² Boletín número 4333, emitido por la Cámara de Diputados.

⁴³ Primer informe emitido por el Senado de la República.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Asimismo, en los referidos informes se señala la actuación de la Procuraduría General de la República, siendo coincidente con la reflejada en los boletines emitidos por el sujeto obligado.

De igual forma, como se refirió anteriormente, derivado de lo acordado con los familiares y representantes de los estudiantes desaparecidos, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁴⁴, la cual acordó supervisar la creación de un Grupo Interdisciplinario de Asistencia Técnica a fin de proveer asistencia y verificación técnica de las acciones iniciadas por México tras la desaparición de los estudiantes.⁴⁵ Cabe señalar que se informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos realizaría su primera reunión el 11 y 12 de febrero del presente año,⁴⁶ sin que a la fecha se tenga algún comunicado oficial sobre dichas actividades.

Finalmente, es importante señalar que cobra especial relevancia la necesidad de permitir el acceso a la información que conste en averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos, pues dicho supuesto no sólo afectan a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican.

Pues como se observa, dichos actos no afectan únicamente a las víctimas sobre las que recayeron los mismos, sino a sus familias, así como a la población del lugar de los hechos pues la multiplicidad de dichos actos atenta contra la seguridad pública, creando un ambiente de temor en la sociedad ante crímenes de tal magnitud y de igual forma trasgrede a la sociedad en su conjunto derivado de la gravedad.

Por lo expuesto, en el presente caso se determina que resulta aplicable la excepción consistente en las violaciones graves a derechos humanos, establecida en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Ahora bien, es importante recordar que el sujeto obligado indicó que la reserva de ley establecida en el artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*, se debe a que se trata de información de interés general cuya difusión afecta a la

⁴⁴ Boletín 194/14 emitido por la Procuraduría General de la República.

⁴⁵ Comunicado de prensa número 133/14, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

⁴⁶ Comunicado de prensa número 008/15, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

sociedad en su conjunto, por lo que la averiguación previa es en sí misma una razón de interés público y por lo tanto la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* le otorgó dicho carácter, por lo que no resultaba aplicable la excepción en análisis, establecida en el último párrafo del artículo 14 del último ordenamiento legal referido, aludida por la ahora recurrente.

Al respecto, debe tenerse presente que en materia de derecho a la información, la regla general es el acceso y máxima publicidad de la información; sin embargo, ésta presenta diversas excepciones que para tal efecto deben estar previstas en leyes, una de ellas, tal como lo indicó la Procuraduría General de la República, corresponde a las averiguaciones previas.

No obstante dicha hipótesis puede tener a su vez excepciones, una de ellas consiste en aquellas averiguaciones previas que investiguen hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la cual también se prevé en una ley en sentido formal y material -en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, por lo que, cuando se actualice la misma no puede alegarse el carácter de reservado de la indagatoria.

Es decir, a pesar de que se previó que las averiguaciones previas debían ser reservadas con el fin de no afectar la persecución de los delitos, también se contempló en el mismo precepto normativo una excepción para los casos extremos, en que derivado de la gravedad de las violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad el interés público de la secrecía de la indagatoria es superado por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, dicha conclusión acorde a la tesis del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro señala "Derecho a la Información. Acceso a las averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad".

En la especie, se ha concluido que para efectos del acceso a la información la averiguación previa relacionada con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, actualiza la excepción contemplada en la Ley de la materia, consistente en violaciones graves a derechos humanos, por lo que, el interés de la sociedad a conocer la verdad histórica de los acontecimientos, la cual se reconstruye por las



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

autoridades competentes del sujeto obligado prevalece sobre el interés público de conservar la reserva de la averiguación previa que atiende lo solicitado.

En ese mismo orden, el sujeto obligado consideró que tratándose de una averiguación previa para efectos del acceso a la información, sólo se puede proporcionar la versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal en los términos del artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*, lo cual no resulta procedente pues el sistema jurídico mexicano se compone por todos aquellos ordenamientos que han sido aprobados por el órgano legislativo, por lo que debe hacerse una interpretación armónica de éstos para cada caso.

En ese sentido, tratándose de averiguaciones previas, la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, que es la ley especial en materia de acceso a la información, contiene una excepción a la reserva de las mismas, resultando aplicable al presente caso.

Por tanto, como se ha dicho, el interés de la sociedad para conocer todas las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público en el presente caso, resulta superior al interés público de la secrecía de la indagatoria que se establece en los artículos 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*, así como en el diverso 13 de la *Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada*, por lo que de conformidad con la audiencia de acceso a la información realizada, se advirtieron entre otras actuaciones, declaraciones, puestas a disposición, inspecciones ministeriales, dictámenes en materias de medicina forense, tecnologías, fotografía, genética, de Tránsito Terrestre e Identificación Vehicular, balística, solicitudes de arraigo, acuerdos de retención de inculpadados, informes de partes policiales, actas de cateo, entre otras, mismas que dan cuenta del ejercicio de las facultades que tiene la Procuraduría General de la República y que ha utilizado para poder conocer la verdad histórica de los hechos, así como para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes los cometieron.

A mayor abundamiento la *Ley General de Víctimas*⁴⁷ prevé lo siguiente:

Artículo 18. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

⁴⁷ <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Artículo 19. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos. Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate.

Artículo 20. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.

Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

El dispositivo jurídico en comento, reconoce el derecho que tienen tanto las víctimas como la sociedad en general de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad, y a conocer la verdad histórica de los hechos.

Ahora bien, las víctimas en particular tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

Asimismo, cuentan con el derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño sufrido por el delito o hecho victimizante que las afectó, o de las violaciones de derechos humanos que



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

sufrieron, para lo cual se comprenden las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

En relación con lo anterior, la Organización de los Estados Americanos⁴⁸, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha señalado respecto del derecho a la verdad, que la interpretación de éste ha evolucionado y actualmente se considera, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a las víctimas y sus familiares así como a la sociedad en general. Conforme a esta concepción, el derecho a la verdad se basa no sólo en el Artículo 25, sino también en los artículos 1(1), 8 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se prevé lo siguiente:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

...

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

...

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

...

Artículo 25. Protección Judicial

⁴⁸ Disponible en: <http://www.oas.org/es/>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
 - a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
 - b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
 - c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

En ese mismo sentido, el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos⁴⁹, en relación con el **derecho a la verdad**, señala en sus conclusiones que éste es un derecho individual que asiste tanto a las víctimas como a sus familiares, pero también **tiene una dimensión colectiva y social**, el cual se encuentra estrechamente ligado al estado de derecho y a los principios de transparencia, responsabilidad y buena gestión de los asuntos públicos en una sociedad democrática. Además de constituir, junto con la justicia, la memoria y la reparación, uno de los pilares de la lucha contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos y de las infracciones del derecho internacional humanitario.

De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre el "Derecho a la verdad en América", aprobado el 13 de agosto de 2014, señala que el referido derecho también corresponde a la sociedad en su conjunto, teniendo así el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos se repitan en el futuro.⁵⁰

Lo anterior, es de gran trascendencia para el caso en concreto en virtud de que el derecho a recibir información específica sobre los delitos, si bien es directamente en favor de las víctimas, lo cierto es que la sociedad en su conjunto también cuenta con

⁴⁹ Consejo de Derechos Humanos., quinto periodo de sesiones, 7 de junio de 2007.

⁵⁰ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf>, párr.71



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

el derecho a la verdad, por lo que el permitir el acceso a la información que obra en la averiguación previa que investiga los hechos en los que se cometieron probables graves violaciones a derechos humanos, permite cumplir con la dimensión colectiva que se ha reconocido al derecho humano en comento.

Aunado a ello, debe tenerse presente que el derecho a la verdad permite que las sociedades al tener conocimiento de hechos como los acontecidos en Iguala, Guerrero, tengan la capacidad para prevenir la repetición de los mismos y, de igual forma, que el Gobierno rinda cuentas sobre su actuación, teniendo como consecuencia que los ciudadanos tengan confianza en sus autoridades al poder verificar las actuaciones llevadas a cabo para determinar a los probables responsables y establecer la verdad histórica, con el fin de que no exista impunidad.

Ahora bien, es importante dejar claro que si bien el sujeto obligado proporcionó múltiples vínculos electrónicos para consultar la información que ha hecho pública en relación con los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014; lo cierto es que dicha información no satisface la solicitud de acceso a la información planteada por el particular, toda vez que lo requerido fue *"...el listado y descripción de objetos, ropas, restos, casquillos y todo tipo de prueba pericial encontrados como evidencia del caso Ayotzinapa y si se tiene se me entregue fotos y copia de las actas con las constancias..."*, por lo que de ninguna manera la respuesta colma lo solicitado.

En este sentido, y derivado de la diligencia de acceso a la información de fecha 24 de abril de 2015, pudo advertirse que las documentales que atienden a cabalidad lo solicitado son las puestas a disposición en las que se hace la descripción de los indicios (objetos, ropas, restos y casquillos); las actas de cateo y las actas de inspección ministerial; todas contenidas dentro de la averiguación previa número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**, que en ese acto se tuvo a la vista.

Así las cosas, también se advirtió que las documentales contienen diversos datos personales considerados como confidenciales, tales como el nombre de presuntos responsables, que no han sido publicados, domicilios particulares, fecha y lugar de nacimiento, firma, entre otros.

Por su parte, se advierte que el nombre de los agentes del ministerio público, peritos en diversas especialidades, quienes ostentan el carácter de personal sustantivo en materia de seguridad, son susceptibles de clasificarse como información reservada



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

En este orden de ideas, en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* se dispone, lo siguiente:

Artículo 6.

...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

...

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

...

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos:
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de
personas, **secuestro o delincuencia organizada**; y cuando a juicio del juzgador sea
necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

**El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos,
testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces
deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;**
...

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se
refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar
protegida en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de
datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que **toda persona tiene
derecho a la protección de sus datos personales.**

Por otra parte, se contiene el mínimo de derechos con los que cuentan las víctimas u
ofendidos, entre ellos se encuentra la reparación del daño, el resguardo de su
identidad y otros datos personales para el caso de secuestro o delincuencia
organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección,
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Estableciéndose además
que el Ministerio Público debe garantizar la protección de víctimas, ofendidos,
testigos, y en general de todos los sujetos que intervengan en el proceso penal.

Ahora bien, en los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la *Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se establece que
se entiende por datos personales cualquier información concerniente a una persona
física identificada o identificable. Asimismo, se prevé como información confidencial
a los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribución o comercialización en los términos de esa ley.

Por lo tanto, este Instituto considera que puede otorgarse acceso a las puestas a
disposición, las actas de cateo y las actas de inspección ministerial que obran
agregadas en la averiguación previa número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**, y que
se describen en el "Acta Administrativa de Acceso a la Información Reservada en
posesión de la Procuraduría General de la República" de fecha 24 de abril de 2015.

Lo anterior, a través de la elaboración de versión pública correspondiente, en la que
se debe protegerse la información confidencial, tanto de los inculpados, las víctimas,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

sus familiares, testigos o terceros relacionados con dicha indagatoria, tal como, nombres, domicilios, entre otros.

En congruencia con lo anterior, al desvincular la identidad de las personas protegidas de la información y la documentación relacionada con las mismas, se cumple con lo dispuesto en el artículo 27 de la *Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro*, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, en virtud de que no es posible identificar a la persona que ocupa dicha calidad.

Por otra parte, también se advirtió que las documentales contienen el nombre de agentes del ministerio público, peritos en diversas especialidades, quienes ostentan el carácter de personal sustantivo en materia de seguridad.

En este sentido, los nombres de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada así como de servidores públicos que tengan funciones operativas deberán protegerse en términos del artículo 13 fracción IV, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, que dispone que debe ser información reservada aquella que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.

Lo anterior, derivado de la naturaleza de las funciones que realizan dichos servidores públicos, como es la integración de la averiguación previa, puesto que se considera que revelar sus nombres podría colocarlos en una situación de vulnerabilidad al poner en peligro su vida o su seguridad, incluso, la de sus familiares, ya que al ser identificadas dichas personas, podrían verse amenazados o presionados por parte de los grupos delincuenciales. Cabe señalar, que dicha reserva no podrá ser aplicable para aquellos servidores públicos que se ya encuentren públicos.

Derivado de todo lo anterior, y en virtud de que ha quedado debidamente probado que en el caso en concreto se configura la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, relativa a violaciones graves a derechos humanos para efectos de acceso a la información, se considera innecesario abordar a estudio, el diverso supuesto de excepción previsto en dicho precepto legal, y relativo a "delitos de lesa



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

humanidad", ya que con la actualización de la excepción que nos ocupa, se satisface el derecho de acceso a la información, resultando ocioso dicho estudio.

En ese sentido, **resulta fundado el agravio del particular** al actualizarse la hipótesis relativa a violaciones graves a derechos humanos, excepción contenida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia.

De conformidad con lo expuesto en el presente Considerando, resulta procedente **revocar** la respuesta emitida por la Procuraduría General de la República, y se le **instruye** a que dentro del plazo máximo de **veinte días hábiles**, entregue las versiones públicas de todas y cada una de las **puestas a disposición, las actas de cateo y las actas de inspección ministerial** descritas en el "Acta Administrativa de Acceso a la Información Reservada en posesión de la Procuraduría General de la República", de fecha 24 de abril de 2015.

El referido plazo, atendiendo al volumen en que obra la averiguación previa y con la finalidad de que el sujeto obligado pueda cumplir a cabalidad con la presente resolución; no obstante, se **instruye** a la Procuraduría General de la República a tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la información hasta que sea proporcionada o puesta a disposición del particular la versión pública de la referida documental que obra en la averiguación previa, en los términos expuestos en el presente considerando.

Ahora bien, en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente "Entrega por internet en el INFOMEX"; sin embargo, derivado de la diligencia de acceso a la información clasificada, se constató por este Instituto que la información solicitada no se encuentra en modalidad electrónica; por lo tanto, la Procuraduría General de la República, deberá indicarle al particular las diversas modalidades de acceso a la información de su interés, tales como copia simple, proporcionando los costos de reproducción, y en su caso envío, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley de la materia, y 50, 52 y 54 de su Reglamento.

Así, en la versión pública que se proporcione, los nombres de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada así como de servidores públicos que tengan funciones operativas deberán protegerse en términos del artículo 13 fracción IV, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, que



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

dispone que debe ser información reservada aquella que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.

Asimismo, a través de la elaboración de versión pública correspondiente, deberá protegerse la información confidencial, tanto de los inculpadados, las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con dicha indagatoria, tal como, nombres, domicilios, entre otros, de conformidad con los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la Ley de la materia.

La versión pública deberá elaborarse conforme a lo dispuesto en los artículos 43 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*; 41 y 70, fracción IV de su Reglamento; Séptimo de los *Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal*; así como en los *Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal*.

En ese sentido, el sujeto obligado deberá de cumplir con lo establecido en el artículo 45 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, y notificar la resolución correspondiente al hoy recurrente o ponerla a su disposición en un sitio de Internet y comunicar a éste último los datos que le permitan acceder a la misma.

Cabe precisar, que en las versiones públicas de las **puestas a disposición, las actas de cateo y las actas de inspección ministerial** que deben ser entregadas, el nombre de los servidores públicos que presuntamente participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero que ya sean públicos, así como de aquellos que ya hayan sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente no podrán omitirse, ya que de acuerdo con la información oficial se refiere en algunos casos a policías municipales, el alcalde de Iguala, entre otros, por tanto, resulta de interés público que se conozcan los mismos, aunado a que la propia Procuraduría General de la República ya ha publicitado en diversas ocasiones los nombres de ellos.

Asimismo, en términos del último párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que señala un supuesto de excepción a la confidencialidad cuando la información se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público, aquellos datos personales que se



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

hayan hecho del conocimiento público no podrán ser considerados como clasificados, tal como aquellos que obran en los comunicados y boletines de prensa de la Procuraduría General de la República.

En términos de lo dispuesto por el artículo 56, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este Instituto verificará previamente a su entrega las versiones públicas con personal adscrito a la Ponencia.

Por último, cabe señalar que, en relación con el diverso recurso **RDA 0791/12 Bis** en contra de la Procuraduría General de la República votado el 4 de septiembre de 2013, tal como lo señaló el sujeto obligado se resolvió confirmar la reserva de la información consistente en las averiguaciones previas relacionadas el caso de la masacre de migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, y se encuentra actualmente en estudio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación;⁵¹ sin embargo, esto no resulta un impedimento para que este Instituto ejerza las facultades que de conformidad con la Ley de la materia y la Constitución tiene conferidas.

En relación con lo manifestado por el sujeto obligado consistente en que se encuentra impedido legalmente para difundir información relacionada con una averiguación previa, acorde a lo previsto por el artículo 225, fracción XXVIII del *Código Penal Federal*, que dispone que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales, imponiéndosele pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa.

Al respecto, y derivado de que la información que debe proporcionar el sujeto obligado es con motivo de la presente resolución que emite este organismo autónomo constitucional en ejercicio de sus atribuciones, no puede aludirse dicho impedimento pues como se ha expuesto la indagatoria iniciada con motivo de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, actualiza la excepción a la reserva de la averiguación previa establecida en el último párrafo del

⁵¹ Disponible en: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=165821>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

artículo 14 de la Ley de la materia consistente en violaciones graves de derechos fundamentales.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 56, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se **REVOCA** la respuesta emitida por la Procuraduría General de la República, en los términos señalados en los considerandos de la presente resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 56, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, así como 91 de su Reglamento, se instruye al sujeto obligado para que en un término no mayor de **veinte días hábiles**, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y en el mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento.

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos de los artículos 37, fracción X, 56, último párrafo, y 63, penúltimo párrafo, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

CUARTO. Con fundamento en los artículos 37, fracción XIX, y 56, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*; 23, fracción XXI del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*; así como en el numeral tercero del Acuerdo por el que se delegan diversas facultades de representación legal del Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil siete, se instruye a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal del Instituto el seguimiento de la presente resolución.

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el artículo 59,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

primer párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

SEXTO. Con fundamento en el artículo 86 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, notifíquese la presente resolución al recurrente en la dirección señalada para tales efectos, y a través de la Herramienta de Comunicación, al Comité de Información del sujeto obligado, a través de su Unidad de Enlace.

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 TELIFAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@ifai.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución.

OCTAVO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.

Así lo resolvieron por unanimidad, y firman los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el segundo de los señalados, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015, ante Rosa María Bárcena Canuas, en ausencia del Coordinador de Acceso a la Información, con las funciones del Secretario de Acceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto, con fundamento en el artículo 42, fracción II, en relación con el 27, fracción I, ambos del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2014.


Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidenta



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Procuraduría General de la República
Folio de la solicitud: 0001700020815
Número de expediente: RDA 0617/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Francisco Javier Acuña
Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra
Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn
Villalobos
Comisionada

Rosendo Evgueni
Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Rosa María Bárcena Canuas
Directora General de Análisis Normativo
y Evaluación de la Información

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión RDA 0617/15, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 27 de mayo de 2015.